

UNIVERSIDAD DE HUANUCO

ESCUELA DE POSGRADO

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRIA EN DERECHO Y
CIENCIAS POLITICAS, CON MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL



TESIS

**“ACTUACIÓN INQUISITIVA DEL REPRESENTANTE DEL
MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA
FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LAURICOCHA
2016 - 2017”**

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN
DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, CON MENCIÓN EN DERECHO
PROCESAL

AUTOR: Contreras Tueros, Elvis

ASESOR: Alvarado Vara, Lenin Domingo

HUÁNUCO – PERÚ

2020

U

D

H



TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias Sociales

Sub área: Derecho

Disciplina: Derecho

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, con mención en Derecho Procesal

Código del Programa: P19

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 43709704

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22720910

Grado/Título: Doctor en derecho

Código ORCID: 0000-0001-6242-1677

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Ponce E Ingunza, Felix	Doctor en ciencias de la educación	22402569	0000-0003-0712-1414
2	Mandujano Rubin, José Luis	Doctor en derecho	41879368	0000-0001-5905-3965
3	Rojas Velasquez, Jeremias	Maestro en derecho con mención en ciencias penales	22497958	0000-0001-6769-4092



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CC.PP.

ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE MAESTRO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

En la ciudad de Huánuco, Auditorio de la Universidad de Huánuco, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve, siendo las 18:30 horas, los Jurados, docentes en la Universidad de Huánuco, **Dr. Félix PONCE E INGUNZA, Presidente, Dr. José Luis MANDUJANO RUBÍN, Secretario, y Mg. Jeremías ROJAS VELÁSQUEZ, Vocal**, respectivamente; nombrados mediante **Resolución N° 606-2019-D-EPG-UDH**, de fecha dieciocho de octubre del año dos mil diecinueve y el aspirante al Grado Académico de Maestro en Derecho Procesal, **Bach. Elvis CONTRERAS TUEROS**.

Luego de la instalación y verificación de los documentos correspondientes, el Presidente del jurado invitó al graduando a proceder la exposición y defensa de su tesis intitulada. "**ACTUACIÓN INQUISITIVA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LAURICOCHA 2016 - 2017**", para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas con mención en **Derecho Procesal**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, luego el Presidente del jurado comunicó el resultado, habiendo obtenido la nota **cualitativa** de MUY BUENO con la calificación **cuantitativa** de (en letras) DIECISIETE; al mismo tiempo recomendó a la Escuela de Post Grado, se le otorgue el grado académico de **Maestro en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Procesal**, al graduando **Bach. Elvis CONTRERAS TUEROS**.

Se suscribe la presente Acta en tres originales y siendo las 20:00 horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.

PRESIDENTE

Dr. Félix PONCE E INGUNZA

SECRETARIO

Dr. José Luis MANDUJANO RUBÍN

VOCAL

Mg. Jeremías ROJAS VELÁSQUEZ

DEDICATORIA

A Dios. Por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para lograr mis objetivos, además de su infinita bondad y amor.

A mis padres. Por los ejemplos de perseverancia y constancia que lo caracterizan y que me han infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por su amor.

Mis hermanos, por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho.

Elvis.

AGRADECIMIENTO

Agradecer a nuestro señor todo poderoso por darme la vida y superación.

A mis maestros de esta prestigiosa universidad de Huánuco por iluminarme intelectualmente.

A mi Asesor Dr. Lenin Domingo Alvarado Vara, por darme la oportunidad de introducirme al mundo de la investigación, contagiarme su interés hacia la misma y ofrecerme confianza, cercanía, apoyo y dedicación a la dirección imprescindible de todo este proceso de investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE	IV
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE DE GRÁFICOS	IX
RESUMEN	X
SUMMARY	XI
INTRODUCCIÓN	XII
CAPÍTULO I	17
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	17
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	19
1.2.1. PROBLEMA GENERAL	19
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	19
1.3. OBJETIVO GENERAL	19
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	19
1.5. TRASCENDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN	20
CAPÍTULO II	22
MARCO TEÓRICO	22
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	22
2.1.1. NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL	22
2.2. BASES TEÓRICAS	24
2.2.1. EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL	24
2.2.2. EL PROCESO PENAL	25
2.2.3. DEFINICIÓN DE PROCESO PENAL	25

2.2.4. FINALIDAD DEL PROCESO PENAL	26
2.2.5. TIPOS DE PROCESOS	26
2.2.6. CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA AL PROCESO PENAL	34
2.2.7. MOMENTOS DE LA PRUEBA	35
2.2.8. PRUEBA INDICIARIA.....	36
2.2.9. PRUEBA INDICIARIA E INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.....	36
2.2.10. OBJETO DE LA PRUEBA	37
2.2.11. MEDIOS DE PRUEBA.....	39
2.2.12. CLASES DE MEDIOS DE PRUEBA.....	39
2.2.13. LA PRUEBA DE APRECIACIÓN FACULTATIVA Y LA PRUEBA DE APRECIACIÓN TAXATIVA.	40
2.2.14. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA	40
2.2.15. PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA PRUEBA	41
2.2.16. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA.....	41
2.3. TEORÍA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA.....	42
2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES	43
2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS	45
2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL	45
2.5.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS	45
2.6. SISTEMA DE VARIABLES	45
2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (VI)	45
2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE (VD)	45
2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	46
CAPÍTULO III	47
MARCO METODOLÓGICO	47
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	47

3.1.1. ENFOQUE.....	47
3.1.2. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN	47
3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	48
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.....	48
3.2.1. POBLACIÓN	48
3.2.2. MUESTRA.....	48
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ...	49
3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.....	49
3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	50
CAPÍTULO IV.....	53
RESULTADOS.....	53
4.1. RELATOS Y DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD OBSERVADA	53
4.1.1. CONJUNTO DE ARGUMENTOS ORGANIZADOS.....	55
4.1.2. ENTREVISTAS, ESTADÍGRAFOS Y ESTUDIOS DE CASO	58
4.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS DE LA FISCALÍA CORPORATIVA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 2016-2017	59
4.1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE CASOS.....	69
CAPÍTULO V.....	73
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	73
5.1. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA	73
5.2. SUSTENTACIÓN CONSISTENTE Y COHERENTE DE SU PROPUESTA.....	75
5.3. PROPUESTA DE NUEVAS HIPÓTESIS	76
CONCLUSIONES	78

RECOMENDACIONES	80
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	81
ANEXOS	83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 1 ¿Para usted, desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?	59
Tabla Nº 2 ¿Para usted los medios de prueba, en materia penal solamente se le confieren únicamente al Ministerio Público?	60
Tabla Nº 3 ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?	61
Tabla Nº 4 ¿Para usted su modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba?	62
Tabla Nº 5 ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba?	63
Tabla Nº 6 ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?.....	64
Tabla Nº 7 ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, son susceptibles de ser objeto de prueba?	65
Tabla Nº 8 ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?.....	66
Tabla Nº 9 ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba?	67
Tabla Nº 10 ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?.....	68
Tabla Nº 11 Escala de Valoración.....	69

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 ¿Para usted, desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?	59
Gráfico N° 2 ¿Para usted los medios de prueba, en materia penal solamente se le confieren únicamente al Ministerio Público?	60
Gráfico N° 3 ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?	61
Gráfico N° 4 ¿Para usted su modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba?	62
Gráfico N° 5 ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba?	63
Gráfico N° 6 ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?	64
Gráfico N° 7 ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, son susceptibles de ser objeto de prueba?	65
Gráfico N° 8 ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?	66
Gráfico N° 9 ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba?	67
Gráfico N° 10 ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?	68
Gráfico N° 11 Análisis de resultados.....	70

RESUMEN

La modernización y adecuación a los nuevos paradigmas de la justicia penal se ha producido en el Código Procesal Penal de 2004, no solo un cambio de código sino un cambio de cultura, hábitos y conceptos al haberse adoptado el "Proceso penal acusatorio con tendencia defensorial", que nos dotaría de mejores indicadores de justicia, mejoraría la imagen de los operadores de justicia y particularmente del Ministerio Público. Es necesario el cambio de roles y de funciones en los sujetos procesales intervinientes en el proceso penal; los que litigan en materia penal, ante las fiscalías corporativas, jueces de investigación preparatoria y jueces unipersonales y superiores, se encuentran dentro de una carrera probatoria sutil, indiferente a los principios de probidad, veracidad, objetividad, intermediación subjetiva y objetiva, donde la presunción de inocencia es mal entendida, y de connotación casi, jure et de jure, que no solo permite al imputado a guardar silencio, sino a faltar a la verdad, llegando inclusive a hablar de un "derecho a mentir", adicionando a la ausencia de la carga probatoria, donde permite evadir la justicia, con deterioro significativo de credibilidad y de la estabilidad jurídica que perjudica el desarrollo económico y social de nuestro país atentando contra la seguridad jurídica. Lo descrito me conlleva a contribuir a la lucha contra la impunidad que es el norte del nuevo sistema de administración de justicia penal, y la necesidad de regular la actuación inquisitiva del representante del ministerio público sobre la carga de la prueba en el proceso penal, sustentando en los principios de intermediación y disponibilidad de la prueba innovando para ello la tradicional "onus probandi", porque quien mayor interés en el esclarecimiento de los hechos imputados, sino que el imputado, máxime cuando éste tiene acceso directo a los medios de prueba y que depende de su voluntad para su incorporación inmediata al proceso, y cuyo mérito definiría la situación subsecuente, sobre la forma o circunstancia de cómo ocurrieron los hechos y sucesos.

Palabras clave: Justicia penal, proceso penal, principio de intermediación, carga de la prueba.

SUMMARY

Modernization and adaptation to the new paradigms of criminal justice has occurred in the Code of Criminal Procedure of 2004, not only a change of code but a change of culture, habits and concepts to have adopted the "accusatory criminal process with advocacy trend", which would provide us with better justice indicators, would improve the image of justice operators and particularly of the Public Ministry. It is necessary to change roles and functions in the procedural subjects involved in the criminal process; those who litigate in criminal matters, before corporate prosecutors, judges of preparatory investigation and single-person and superior judges, are within a subtle evidentiary race, indifferent to the principles of probity, truthfulness, objectivity, subjective and objective immediacy, where the presumption of innocence is misunderstood, and of almost connotation, swears *et de jure*, that not only allows the accused to keep silence, but to lack the truth, even going so far as to speak of a "right to lie", adding to the absence of the evidentiary burden, where it allows to evade justice, with significant deterioration of credibility and legal stability that harms the economic and social development of our country, undermining legal security. What is described leads me to contribute to the fight against impunity that is the north of the new system of administration of criminal justice, and the need to regulate the inquisitive action of the representative of the public prosecutor's office on the burden of proof in the criminal process, supporting in the principles of immediacy and availability of evidence, innovating for it the traditional "*onus probandi*", because whoever is more interested in clarifying the facts charged, but the accused, especially when he has direct access to the means of proof and it depends on his will for his immediate incorporation to the process, and whose merit would define the subsequent situation, on the form or circumstance of how the events and events occurred.

Keywords: Criminal justice, criminal procedure, principle of immediation, burden of proof.

INTRODUCCIÓN

La valoración y la carga de la prueba en el proceso penal peruano tiene como fundamento legal, en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el artículo IV, inciso 1 del Título Preliminar del NCPP, establece: “el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba”, en concordancia con el artículo 321 inciso 1 del NCPP; y con respecto al artículo 393, inciso 2 del NCPP: “...la valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos...”, respecto a la carga de la prueba aparece en el derecho romano como una institución del derecho procesal civil, esto es quien alega un hecho debe de probarlo; pasando también a ser institución del proceso penal, esto es, quien acusa un delito debe de probar la responsabilidad del acusado, a través de la carga de la prueba, dado que si no hay prueba, así el acusado no pruebe su inocencia con pruebas de descargo está protegido por el principio de inocencia. En lo que respecta al tema de valoración de la prueba, que le corresponde al juzgador conforme se detalla, existen varios sistemas de valoración de la prueba que los sistemas jurídicos en materia penal lo han utilizado, lo utilizan o lo dejarán de utilizar, conforme a sus orientaciones sociales, jurídicas y políticas, que podrían ser el sistema de prueba legal, de libre convicción o de sana crítica. El tema de la carga de la prueba en la comunidad jurídica resulte dilucidado y obvio, ya que está generalizado en ella quién alega o afirma un hecho está obligado a acreditar su acierto; sin embargo ello no es totalmente cierto en materia penal, porque detrás de este concepto está la inocencia o la culpabilidad del imputado; inclusive se prefiere pensar que la estructura procesal penal es absolutamente ajena a las instituciones, objetivos y fines de la “Teoría General del Proceso”, en los que se sustentan el proceso civil, laboral o contenciosos por lo que sea cual fuere las justificaciones ya sea por defecto u omisión, por ende considero dentro del proceso penal a la luz del nuevo Código Procesal Penal de 2004, en aras de lograr un conocimiento cabal sustentado en la realidad social, en la doctrina del Derecho Procesal Científico, en la jurisprudencia producida a partir de la vigencia del Código

Procesal Penal aludida la que a decir de sus mentores responde al Sistema "acusatorio garantista con tendencia defensorial" y no a una actuación inquisitiva, generando mejores indicadores de justicia, mejorará significativamente la imagen de los operadores de justicia y particularmente el del Ministerio Público y que para ello es menester un cambio de mentalidad, de actitudes, y la asignación de nuevas funciones (roles) a los sujetos en el proceso penal; los que litigamos en materia penal, ante las fiscalías corporativas, jueces de investigación preparatoria, jueces unipersonales y superiores, pretendemos de una carga probatoria sutil, indiferente a los valores y principios de licitud, idoneidad, pertinencia objetividad, inmediación subjetiva y objetiva, donde la presunción de inocencia es mal entendida, concibiéndola como una cuasi jure et de jure, que no solo permite al imputado a guardar silencio, sino a faltar a la verdad, llegando inclusive a hablar de un derecho a mentir, la que adicionada a la ausencia de asignación razonable de la carga probatoria se le permite evadir la acción de la justicia, cuyo efecto son: el deterioro de la credibilidad o confianza en el poder judicial, de la estabilidad jurídica que perjudica el desarrollo económico y social de nuestra nación, atentando contra la institucionalización del Estado y de su proceso de afirmación democrática.

La carga de la prueba permitirá mejorar la justicia legal como hemos afirmado y que los fiscales en un porcentaje significativo cotidianamente lo usan al motivar sus disposiciones, requerimientos y acusaciones al igual los jueces lo expresan en sus fallos, por lo que es importante que el Fiscal no actúe de manera inquisitiva sus acusaciones por ende se pierda la objetividad del proceso penal por ello el índices de justicia legal existentes, decididamente apuesta por la eficacia o cuando menos por la eficiencia de la labor de los fiscales y del propio proceso penal entendida como control especial de ultima ratio.

Por ende me propuestos formular las siguientes interrogantes ¿En qué medida la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha?, ¿Por qué el representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal?, ¿En qué medida mejorará la

investigación del imputado cuando del representante del Ministerio Público actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal?, ¿Cómo se debe evitar la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público cuando no actúa en igualdad de condiciones las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal?; del mismo modo los objetivos están formulados: Determinar en qué medida la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, Establecer por qué el representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal, Conocer en qué medida mejorará la investigación del imputado cuando del representante del Ministerio Público actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal, Saber cómo se debe evitar la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público cuando no actúa en igualdad de condiciones las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal. La trascendencia teórica técnica o práctica y académica estuvo orientada a describir, precisar, esclarecer y analizar la nueva problemática que se viene planteando en función en términos prácticos y en términos teóricos necesarios: Porque ayudara a los operadores de justicia sean Fiscales, Jueces, Asistentes de la función fiscal y Abogados que al momento de plantear su teoría del caso opten por el principio de oportunidad, acuerdo resarcitorio entre imputado y víctima, transijan o en todo caso opten por los procesos especiales (proceso inmediato etc.) resolviendo de manera pronta su situación jurídica y no pretendan escabullir a la justicia penal por insuficiencia probatoria promovida por inacción del imputado justificado legalmente en la presunción de inocencia con detrimento del deber primario del Estado y consecuente inseguridad jurídica de los ciudadanos. La investigación nos permitirá también establecer conceptos claros que diferencia la denominada "invitación a decir lo conveniente" por el imputado, por el deber de colaborar activamente por este por intermediación y por facilidad o disponibilidad probatoria que permitan establecer que no solo el fiscal o el actor civil tienen la carga de la prueba sino también el imputado y que éste no confunda su derecho a la presunción de inocencia y de defensa no se confunda con el derecho a mentir a entorpecer el proceso sino a colaborar

razonablemente siempre que medie intermediación y disposición de los medios de prueba en aras de la justicia y el Estado estaría cumpliendo realmente con el encargo constitucional de garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso, de defensa y los principios de veracidad, probidad y lealtad de las partes en el proceso legal.

Con la investigación esperamos no solo contribuir a promover la investigación sobre la carga probatoria de las partes en el proceso penal, la presunción de inocencia como presunción juris tantum sino además como derecho constitucional limitado y que el derecho a la defensa dentro de los valores constitucionales que los irradia y contribuyendo decididamente con la función fiscal en el cumplimiento cabal del encargo constitucional y con el principio de objetividad en la investigación preliminar que resulta congruente con la finalidad sustantiva del Código Procesal Penal puesta en vigencia en Huánuco.

Se ha utilizado el nivel descriptivo y explicativo, por cuanto las investigaciones de nivel descriptivo, consistió, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado. Y del mismo modo el nivel explicativo trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. El diseño que se ha utilizado es no experimental siendo su enfoque cualitativo, observándose los cambios que se dan en su contexto a partir de información. Del mismo modo las técnicas utilizadas durante la investigación fueron:

Fichaje. - Me permitió la abstracción de información teórica legal y jurisprudencial, casos, libros, revistas, fuentes de internet.

Encuesta. - A través de la encuesta se obtuvo la información de los Abogados litigantes especialistas en materia penal.

Técnicas estadísticas. - Me permitió la representación estadística de los resultados obtenidos de la información procesada, su aplicación mediante porcentajes, cuadros y gráficos, así como el análisis.

Instrumentos. - Son los recursos auxiliares que nos sirvió para recolectar los datos de las fuentes, en el manejo de las técnicas adecuadas para cada una

de ellas y que nos permitió obtener la información para la realización de nuestra investigación.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Hablar de la carga de la prueba en materias extra penales quizá resulte un asunto dilucidado y casi evidente de que quién alega o afirma un hecho está obligado a acreditar su acierto; empero, en materia penal ello no ocurre. Quizá se deba a lo que está detrás de este concepto: la inocencia o la culpabilidad, inclusive preferimos pensar que la estructura procesal penal es absolutamente ajena a las instituciones, objetivos y finalidad de la teoría general del proceso, en los que sí puede sustentarse los procesos civiles, laborales o contenciosos. Sin embargo, ya sea por defecto u omisión, consideremos que es un tema que debe ser investigado partiendo de los operadores de justicia en aras de lograr un conocimiento basado en la realidad social, en la doctrina del Derecho Procesal Científico, en el Derecho Objetivo, en la jurisprudencia producida con el Código Procesal Penal, Código que se proclama tributario del "Proceso penal acusatorio garantista con tendencia defensorial" que nos dotará de mejores indicadores de justicia, mejoraría la imagen de los operadores de justicia y particularmente el del Ministerio Público y para ello resulta necesario el cambio de roles y la asignación de funciones a las partes intervinientes en el proceso penal; porque los que litigamos en materia penal, ante las fiscalías corporativas, jueces unipersonales y superiores, nos encontramos dentro de una carrera probatoria etérea, gaseosa, indiferente a los principios de objetividad, intermediación subjetiva y objetiva, donde la presunción de inocencia es mal entendida, casi, jure et de jure, que no solo permite al imputado a guardar silencio, sino a faltar a la verdad, llegando inclusive a hablar de un derecho a mentir, la que adicionada a la ausencia de carga probatoria, permite evadir la justicia, con deterioro significativo de credibilidad y de la estabilidad jurídica que perjudica el desarrollo económico y social de nuestro país atentando contra la seguridad jurídica y nuestro proceso de afirmación

democrática.

Precisamente por ello es necesario para nosotros ingresar cambios importantes en materia probatoria en el proceso penal como resulta ser "la inversión de la carga de la prueba"; de lo contrario la prueba en el proceso penal o, mejor dicho, la actividad probatoria seguirá volátil como venía siendo con el Código de Procedimientos Penales y el Decreto Legislativo 124 que regula el proceso penal sumario aún vigentes en muchos departamentos del Perú, cuyos altos indicadores de injusticia, morosidad, e impunidad ha dado lugar a la dación del nuevo Código Procesal Penal, no solo para compatibilizar los encargos constitucionalizados al Ministerio Público, sino partiendo de ello se busca ingresar a un nuevo sistema procesal con marcada presencia dispositiva o privatista ab initio, porque privilegia la satisfacción de los intereses de los litigantes principio de oportunidad, acuerdo resarcitorio, transacción etc. así como el relacionado a la carga de la prueba en la que subyace la concepción de que "salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos", de que "Si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, esta será declarada infundada, si no hay suficiencia probatoria el imputado será absuelto de los cargos pues la sentencia debe ser conforme a lo alegado y probado suficientemente" la que conforme a la Ratio Legis es posible mejorarla mediante la inversión de la carga de la prueba en el proceso penal, partiendo de lo que ya se ha legislado sobre los delitos de enriquecimiento ilícito, el lavado de activos etc., todo ello sin variar la estructura de la presunción de inocencia constitucionalizada más por el contrario nos permitirá cumplir con el interés público de génesis publicista en el ámbito teórico sino en términos concretos permitirá cumplir la función fiscal a cabalidad, fortalecerá y devolverá a los justiciables credibilidad en el servicio de justicia legal que presta el Estado, a decir de Monroy Calvez "lo más importante en el proceso no es que los particulares resolvieran su conflicto sino que, a través de él, el derecho objetivo creado por el propio Estado se tornara eficaz y respetado.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA GENERAL

PG: ¿En qué medida la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

PE₁. ¿Por qué el representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal?

PE₂. ¿En qué medida mejorará la investigación del imputado cuando el representante del Ministerio Público actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal?

PE₃. ¿Cómo se debe evitar la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público cuando no actúa en igualdad de condiciones las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal?

1.3. OBJETIVO GENERAL

OG.₁: Determinar en qué medida la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OE.₁: Establecer por qué el representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal.

OE.₂: Conocer en qué medida mejorará la investigación del imputado cuando del representante del Ministerio Público actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal.

OE.₃: Saber cómo se debe evitar la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público cuando no actúa en igualdad de condiciones las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal.

1.5. TRASCENDENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación estuvo orientada a describir, precisar, esclarecer y analizar la nueva problemática que se viene planteando en función en términos prácticos y en términos teóricos necesarios: Porque ayudará a los operadores de justicia sean Fiscales, Jueces, Asistentes de la función fiscal y Abogados que al momento de plantear su teoría del caso opten por el principio de oportunidad, acuerdo resarcitorio entre imputado y víctima, transijan o en todo caso opten por los procesos especiales (proceso inmediato etc.) resolviendo de manera pronta su situación jurídica y no pretendan escabullir a la justicia penal por insuficiencia probatoria promovida por inacción del imputado justificado legalmente en la presunción de inocencia con detrimento del deber primario del Estado y consecuente inseguridad jurídica de los ciudadanos. La investigación nos permitió establecer conceptos claros que diferencia la denominada "invitación a decir lo conveniente" por el imputado, por el deber de colaborar activamente por este por intermediación y por facilidad o disponibilidad probatoria que permitan establecer que no solo el fiscal o el actor civil tienen la carga de la prueba sino también el imputado y que éste no confunda su derecho a la presunción de inocencia y de defensa no se confunda con el derecho a mentir a entorpecer el proceso sino a colaborar razonablemente siempre que medie intermediación y disposición de los medios de prueba en aras de la justicia y el Estado estaría cumpliendo realmente con el encargo constitucional de garantizar la presunción de inocencia, el debido proceso, de defensa y los principios de veracidad, probidad y lealtad de las partes en el proceso legal.

Con la investigación contribuimos a promover la investigación sobre la carga probatoria de las partes en el proceso penal, la presunción de inocencia como presunción juris tantum sino además como derecho constitucional limitado y que el derecho a la defensa dentro de los valores constitucionales que los irradia y contribuyendo decididamente con la función fiscal en el cumplimiento cabal del encargo constitucional y con el principio de objetividad en la investigación preliminar que resulta congruente con la finalidad sustantiva del Código Procesal Penal puesta en vigencia en Huánuco hace un año.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL

Luego de haber revisado las bibliotecas de las universidades de nuestro medio, tanto a nivel de Postgrado, no se ha encontrado trabajos que guarden relación con la presente tesis.

Nivel Nacional:

- **Néstor Raúl CARO ESPITIA (2013-2015), LA CARGA DE LA PRUEBA FRENTE AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL ESTADO COLOMBIANO**, (Tesis para la obtención del Grado de Magister en Derecho Procesal) Universidad de Católica del Norte, en la misma que concluye “En materia probatoria, el Derecho privado se diferencia del Derecho penal porque en el primero corresponde a las partes la carga de la prueba, mientras que en el segundo es al órgano de investigación al que le corresponde demostrar los hechos en que fundamenta su acusación, para desvirtuar la presunción de inocencia, “sin que en ningún caso se pueda invertir esa carga probatoria”. No obstante, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han venido aplicando la teoría de las cargas dinámicas probatorias, propia del Derecho privado, lo cual genera no solo la inversión de la carga de la prueba sino la crisis del principio de la presunción de inocencia”.
- **Eduardo HERRERA VELARDE**, un ensayo sobre: "**LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA PENAL**", quien señala que “la configuración de la carga de la prueba en el proceso señalando sus diferencias con los deberes procesales de los sujetos procesales y su vinculación con los derechos procesales. Asimismo, examina la funcionabilidad del concepto de carga de la prueba en el proceso civil, donde corresponde a “quien afirma un hecho o los

contradice está obligado a probarlos, (salvo que existan presunciones legales relativas o absolutas, y en el proceso penal , donde corresponde al Ministerio Público la carga y quien debe conjugar con su función de velar por la legalidad y objetividad, más no al imputado, quien en principio no tiene el deber de colaborar con la obtención de pruebas , pese a lo cual en ocasiones se prevén legalmente consecuencias perjudiciales a esta postura renuente".

- **FREDDY LING**, la Tesis **"EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"**, que se relacionada parcialmente con nuestra investigación porque el tesista arriba a las siguientes conclusiones:

“1. No debe entenderse INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA cuando se exige justificación del incremento patrimonial desproporcional pues el Ministerio Público será siempre el responsable de la carga de la prueba por mandato constitucional, artículo 159.1º y 5º, por ser titular de la acción penal, por lo que ***la "justificación" a la que hace mención el tipo penal debe ser entendida como el derecho del imputado a contradecir la acusación fiscal, atribución que es siempre facultativa y no como una inversión de la carga de la prueba.***

2. El principio de inocencia es congruente con la presunción contenida en el tipo penal del artículo 401, pues la presunción del tipo penal es una presunción *luris Tantum*, que admite prueba en contrario y por tanto no prohíbe o restringe el derecho de contradicción ni defensa del imputado.

3. La presunción de ilicitud, al ser un indicio requiere ser valorada con otros indicios de acuerdo al artículo 158 del Nuevo Código Procesal Penal o con otros medios de prueba, por lo que inferir que el simple indicio de ilicitud es prueba suficiente de la comisión del delito es ilegal por insuficiencia probatoria e inconstitucional por no corresponder al principio de presunción de inocencia (la prueba indiciaría no se opone a la presunción de inocencia pues requiere siempre una actividad probatoria complementaria para generar

convicción de culpabilidad).

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

El Nuevo Código Procesal Penal, se estructura sobre la base del Sistema Procesal Penal Acusatorio Moderno con rasgos adversarial y garantista.

- Acusatorio, porque el fiscal culminado la investigación preparatoria, formula su acusación basado en los elementos o pruebas de convicción creíbles, fehacientes (indicios y evidencias), La Investigación lo realiza con apoyo de la Policía Nacional, organismos públicos y privados, quienes están obligados a colaborar con el Titular de la acción Penal.

Parte de la división de funciones: acusación y decisión. El juez está sometido a las pruebas que presentan las partes y no puede investigar. El proceso se desarrollaba según los principios del contradictorio, de la oralidad y de la publicidad.

- Garantista, los operadores de justicia, deben respeto irrestricto a los derechos fundamentales de la persona. Vivimos en un Estado de derecho constitucional, en la que las actividades procesales deben estar subordinadas a las normas constitucionales en lo que concierne a la actividad procesal en concordancia a las normas supranacionales. Ej. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), Pacto de Costa Rica y otros.
- Adversarial, las partes se someten a un proceso en igualdad de condiciones, es decir con las mismas armas. Opera la relación adversarial donde los contrincantes poseen los mismos medios de ataque y defensa. Pueden contradecir respecto de la imputación y los medios de prueba de cargo o descargo.

El sistema Procesal penal acusatorio moderno comporta dos notas esenciales: la existencia de un ente acusador y el desdoblamiento de funciones.

2.2.2. EL PROCESO PENAL

El proceso deriva de la palabra latina *procederé*, que significa: camino hacia un determinado fin. El proceso es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo, manteniendo relación, de modo que están concatenados, sea por el fin perseguido, sea por la causa que los genera.

El Estado, siguiendo la teoría libertaria, surge con la finalidad de resguardar los derechos fundamentales y esenciales para la convivencia pacífica, como la vida, la libertad, la propiedad entre otros. En el afán de proteger tales derechos, el Estado monopoliza la administración de justicia, no solo en el área de la criminalidad sino también en el campo de los conflictos civiles. Así se creó el Poder Judicial, al que se le delego el poder de impartir justicia; posteriormente se creó el Ministerio Público como ente vinculado a la administración de justicia. Para dicha misión se creó un mecanismo racional y eficaz pasible de ser perfeccionado con el tiempo, para llegar a la verdad y proteger los derechos fundamentales, esto es el proceso Penal.

2.2.3. DEFINICIÓN DE PROCESO PENAL

Es el conjunto de actos realizados por determinados sujetos (jueces, fiscales, defensores, imputados, etc.) con el fin de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una sanción y, en el caso de que tal existencia se compruebe, establecer la cantidad, calidad y modalidades de esta última."

2.2.4. FINALIDAD DEL PROCESO PENAL

El proceso penal tiene un carácter instrumental, ya que a través de él se afirma y hace efectivo el derecho penal sustantivo Código Penal, es posible también afirmar que posee objeto y finalidad propios.

En cuanto a la finalidad del proceso penal es la declaración de certeza judicial y no como se argumentaba anteriormente, lograr la verdad concreta de los hechos, ya que en algunos casos ello no se realiza o no es posible, entre otras causas por la tenaz acción de las partes en defensa de los particulares intereses que defienden.

Si relacionamos la noción sobre el objeto del proceso con la finalidad del mismo, podremos concluir diciendo que el proceso penal aspira a obtener la evidencia respecto de la conducta ilícita imputada el cual servirá para, determinar responsabilidad penal y grados de participación criminal y por otro lado la posibilidad de declarar la absolución de los cargos de las personas que sobre quienes recae una imputación delictiva.

2.2.5. TIPOS DE PROCESOS

A. El proceso penal según el derecho vigente parcialmente, Código de Procedimientos Penales

Como ya dijimos anteriormente el Nuevo Código Procesal Penal se encuentra en proceso de implementación por ello aun es de aplicación el Código de Procedimientos Penales del año 1940. Existen tres tipos de proceso penal para juzgar los delitos perseguibles por acción pública: Ordinario y Sumario, asimismo en vía especial la Querrela es una vía procesal establecida para los delitos perseguibles por acción privada y los proceso por faltas.

B. El Proceso Penal Ordinario

Este proceso es el tipo al que se refiere el artículo primero del Código de Procedimientos Penales en función al sistema penal mixto cuando sostiene que el proceso penal se desarrolla en dos etapas: La instrucción o periodo investigatorio y el juicio que se realiza en instancia única, acá se pueden ver las dos etapas claramente definidas, la instrucción o investigación realizada aun por el Juez Penal y el Juicio llevado a cabo por la Sala Superior.

En estos procesos se lleva a cabo claramente las dos etapas, una de investigación que tiene un plazo de cuatro meses, que se puede prorrogar hasta por sesenta días más a fin de recolectar más elementos de prueba y una segunda que es la etapa del juzgamiento o Juicio Oral que se realiza ante el Colegiado de la Sala Penal, bajo los principios rectores de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación.

C. El Proceso Penal Sumario

Se estableció bajo el fundamento de lograr celeridad en la administración de justicia, con plazos más breves, fue instaurado originariamente para delitos que no revisten gravedad tales como daños, incumplimiento de deberes alimentarios, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, etc. En este proceso se le otorga facultad del fallo al Juez que instruye, quien dicta sentencia por el solo mérito de lo actuado en la instrucción sin mayor análisis ni evaluación de las pruebas y sin hacer propiamente el juicio oral. En consecuencia, se vulneran las garantías de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación.

D. Procedimientos Especiales

En el proceso penal peruano encontramos además procedimientos que requieren un trámite diferente a los demás, con pautas y reglas para cada caso, atendiendo a su carácter especial. Estos procedimientos son:

i) La Querella

Está reservado para los delitos que se persiguen por acción privada, es decir para aquellos que requieren denuncia e impulso de la parte agraviada o que se sienta ofendida, como en los casos de los delitos contra el honor, contra la intimidad.

La denuncia se plantea directamente al Juez Penal, por la persona agraviada o por un pariente de conformidad con el artículo 74 del Código de Procedimientos Penales. No interviene el Ministerio Público y menos la Policía Nacional en su función de investigación.

ii) Las Faltas

Son aquellos comportamientos contrarios a la ley penal que ocasiona una leve o escasa lesión en el ámbito social, por lo cual se dispone un trámite acelerado, artículos 324 al 328 del Código de Procedimientos Penales. El proceso de faltas en nuestra legislación se encontraba legislado desde el siglo XIX Código de Enjuiciamientos Penales de 1863; asimismo en el Reglamento de Jueces de Paz, se estipulaba como debían ser tratados los procesos por faltas. Luego se contempló su tratamiento en el Código de Procedimientos en Materia Criminal (Ley 4019) de 1919 y en el Código de Procedimientos Penales vigente (Ley 9024) de 1940. La instrucción está a cargo del Juez de Paz Letrado, quien cita a las partes a una audiencia de esclarecimiento de los hechos e inicialmente promueve y propone que las partes puedan arribar a un acuerdo conciliatorio con reparación de los daños ocasionados de ser el caso.

E. El proceso penal en implementación según el Código Procesal Penal de 2004

El Nuevo Código Procesal Penal plantea una total reforma de la estructura procedimental. En términos generales el proceso penal se rige por las reglas establecidas por el denominado proceso penal común, existiendo una serie de especialidades procedimentales.

Las Etapas en el Nuevo Proceso Penal

El proceso penal no es solo el marco a través del cual se legitima la sanción estatal, sino además el ámbito de discusión y solución de un conflicto de intereses surgido a consecuencia de la comisión de un delito que requiere de etapas o fases procedimentales que permitan garantizar la eficacia de sus fines. Estas etapas son:

1. La etapa de investigación

La etapa de investigación es aquella que busca reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permiten al fiscal decidir si formula o no acusación y al imputado preparar su defensa.

En la nueva dinámica del proceso penal, el sistema de justicia penal se moviliza cuando se acusa a una persona de haber incurrido en la comisión de un ilícito penal. Este deber de comunicar tales pretensiones recae, en principio, en el agente del Ministerio Público.

Sin embargo, el hecho de que el agente del Ministerio Público decida formular una acusación penal debe ser la consecuencia de una investigación que ha realizado previamente y que le permita reunir información que genere en él convicción de la existencia de un hecho que reúne los elementos que lo califiquen como delito, así como de la presencia de un presunto responsable. En tal sentido, las funciones de investigación y acusación son inseparables, imprescindibles de la actuación del Ministerio Público.

2. La etapa intermedia

La etapa intermedia es una fase de saneamiento que tiene por fin eliminar todo vicio o defecto procesal que afecte la eficacia de lo actuado y que haga imposible la realización del juicio oral. Esta función de filtro gira en torno: a) A los requerimientos tanto de acusación como de sobreseimiento, emitidos por el fiscal; y, b) La prueba presentada por las partes.

3. La etapa del juzgamiento (juicio oral)

De manera esquemática, cuando el Ministerio Público ha formulado acusación contra el imputado, y luego de haberse establecido en la etapa intermedia la inexistencia de algún vicio o defecto procesal que invalide todo lo actuado, así como de haberse admitido las respectivas pruebas presentadas por las partes, el juez remite todo el expediente al juez encargado de llevar a cabo el juicio oral.

Esto último es una nota distintiva en el nuevo proceso penal latinoamericano. Es decir, el Juez que participa en la investigación (no como el investigador sino como garante del respeto a los derechos de las personas involucradas en un proceso penal) es diferente al Juez que dirige el juzgamiento, con lo cual (observando el principio de imparcialidad) se evita que el juzgador quede contaminado por los actos previos al juicio oral y que pongan en contradicho su imparcialidad a la hora de resolver el conflicto penal.

Por lo tanto, el juez de la investigación preparatoria remite los actuados al juez encargado del juicio, quien al recibirlo emitirá una resolución judicial a través de la cual comunica a los sujetos procesales la fecha, hora y lugar de realización del juicio oral (a la cual en países como Perú se lo denomina auto de citación a juicio). De

esa forma, una vez notificada la resolución solo debe esperarse la realización de la audiencia del juicio oral.

A continuación, se hará una revisión de las modalidades procedimentales tipos de procesos según el NCPP las cuales serán desarrolladas.

a. El proceso penal común

Todos los delitos de ejercicio de la acción pública serán investigados y juzgados mediante un único proceso común. Solo los delitos de ejercicio privado de la acción serán juzgados mediante un proceso especial.

El proceso penal común aparece como la forma procesal eje del NCPP. El Libro II del NCPP desarrolla las diversas fases del proceso penal común: Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juzgamiento.

b. Los procesos especiales

La nueva legislación penal adjetiva, en lo referente a su tramitación distingue dos tipos de proceso: común y especial. Por lo general, casi todos los delitos catalogados en el Código Penal, se desarrollan por el "proceso común" sin embargo otros hechos punibles y por otras razones se identifican dentro de un proceso especial, pero siguiendo la organización básica del primero.

Los procesos especiales permiten evitar que la causa llegue al juzgamiento, reduciendo las etapas del proceso y su duración, con ello se busca la celeridad en la administración de justicia, incluyendo algunos beneficios para las partes sobre todo para el imputado.

Asimismo, se presentan para casos especiales, dada a las características del imputado (altos

funcionarios o inimputables) o por hechos punibles de connotación leve (faltas) o de acción privada. Como antes se precisó, el NCPP establece una serie de especialidades procedimentales que acompañan al denominado proceso penal común; estas son:

El proceso inmediato

Dentro de los procesos especiales del NCPP se ubica el proceso inmediato, para supuestos de flagrancia delictiva, confesión del imputado o abundancia de carga probatoria. Se caracteriza por su celeridad, consecuencia del recorte de la actividad probatoria.

El proceso por razón de la función pública

Existen, dentro de esta tipología procedimental, tres sub-clasificaciones: el proceso por delito de función contra altos funcionarios públicos; el proceso por delito común atribuido a congresistas y otros altos funcionarios públicos; y el proceso por delito de función atribuidos a otros funcionarios públicos.

El proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal

Este tipo de proceso opera esencialmente para los casos de delitos cuyo ejercicio de la acción es de tipo privado querrela.

El proceso de terminación anticipada

Este tipo de proceso está destinado a la regulación de la figura de la terminación anticipada del proceso penal.

El proceso por colaboración eficaz

El proceso por colaboración eficaz regula el trámite correspondiente a la concesión de beneficios por colaboración eficaz del imputado.

El proceso por faltas.

La orientación del Nuevo Código Procesal Penal, es la no intervención del Ministerio Público en el proceso por faltas, lo que pone en duda de que el principio del debido proceso se esté aplicando, puesto que la infracción denunciada no es formalizada o no existe acusación. Al margen de ello corresponde al Juez que conoce de las faltas brindar las garantías del debido proceso tanto a imputado como al perjudicado.

Genera que se tomen decisiones que afectan a la víctima en cuanto a su situación laboral. El hecho de defender la honra y la dignidad, teniendo como respuesta frente al hostigador, un rechazo o la no bienvenida categórico a todo acto que perjudique o altere el estado de ánimo del hostigado/a va a generar negativamente su empleo.

Naturalmente, tiene que tratarse de una afectación con alguna significación. Los efectos intrascendentes como por ejemplo un simple cambio en la denominación del puesto de trabajo que no viene acompañada de una alteración en las funciones o de una disminución de categoría y/o de remuneración, no llegan a constituir una afectación al empleo con alguna significación. No puede dejar de reconocerse, asimismo, que la afectación al empleo está directamente relacionada con la gravedad y severidad de la conducta de carácter sexual. En este sentido en los Estados Unidos de América, citando diversas decisiones judiciales, ha señalado que "(...) las leyes anti discriminatorias no son un "código general de urbanidad". Así la ley federal no prohíbe el simple bromeo, los

comentarios bruscos, o los incidentes aislados que no son. "extremadamente serios".

La afectación del empleo, sin embargo, se evalúa de diferente manera según la modalidad de acoso sexual de la que se trate: el acoso sexual *quid pro quo* o por chantaje y el acoso sexual por ambiente hostil de trabajo.

En ese sentido se entiende que cualquier afectación al empleo de la víctima del acoso sexual será suficiente para que el mismo se configure, requiriéndose naturalmente que la misma sea relevante. Eso sí, la afectación concreta y tangible inevitablemente tiene que producirse, siendo en consecuencia indispensable que la víctima del hostigamiento demuestre que alguna oportunidad de empleo se ha visto afectada a causa de su actitud frente a la conducta de carácter sexual.

2.2.6. CONCEPTO DE CARGA DE LA PRUEBA AL PROCESO PENAL

En el proceso penal por excelencia, y por disposición legal contenida en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la carga de la prueba recae, valga la redundancia, en el Ministerio Público. No existe explicación normativa que nos diga porque el Ministerio Público tiene esa condición, pero debe entenderse, por aplicación de la lógica del proceso civil, que es porque es el accionante, el que alega los hechos. Siendo ello así se llega a la idea de que al ser el Fiscal quien afirma la comisión de un delito en la concurrencia de hechos acaecidos en la realidad, es su deber probarlo.

El Código de Procedimientos Penales no tiene una disposición expresa al respecto y deja ese vacío en la norma de la Ley Orgánica del Ministerio Público que he

citado.

No obstante, el Código Procesal Penal en su Título Preliminar, artículo IV ya dentro de un esfuerzo de integración positiva refiere que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, quien además «tiene el deber de la carga de la prueba.

2.2.7. MOMENTOS DE LA PRUEBA

Aunque es clara la diferencia de regulaciones entre el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, puedo concluir en que existen también claramente definidos los distintos momentos de la prueba en el proceso penal peruano. Este pequeño análisis nos ayudará en lo sucesivo del presente ensayo como lo veremos luego. Para no ser abundante en el tema, puedo distinguir hasta cuatro momentos de la prueba en el procedimiento penal, a saber:

a) Ofrecimiento: Este es un acto exclusivo de la parte. En el procedimiento penal está ceñido al Ministerio Público, a la parte o actor civil y al imputado.

b) Admisión: Acto a cargo del Juzgador y en la etapa preliminar a cargo del Ministerio Público. Como ya he soslayado, en el Código de Procedimientos Penales no existe, salvo en el juicio oral, una etapa definida e identificable, coyuntura que como vemos en la realidad puede motivar desorden e incluso indefensión. Este momento está relacionado a las categorías de permisión y pertinencia. Es decir que estén permitidos (no prohibidos) y tengan vinculación a lo que es materia de proceso.

c) Actuación: Este momento también está a cargo del Juzgador y en su caso del Ministerio Público. Existen casos de medios de prueba que su actuación es concomitante a su valoración como el caso de los documentos. Existen también otros casos en que la actuación depende del consentimiento de quien detenta la

prueba, tal es el caso por ejemplo de la extracción de muestras de sangre del imputado.

d) Valoración: Podría discutirse si este es un momento de la prueba o en realidad no. Sin embargo, esta actividad que realiza siempre quien juzga guarda relación al examen propiamente dicho de la prueba, como previa a la emisión de la resolución correspondiente.

2.2.8. PRUEBA INDICIARIA

Nuestro ordenamiento procesal penal actual no ofrece un concepto legal de prueba, tan sólo aspectos de su actividad, objeto, valoración y utilización, menos una definición normativa de prueba indiciaria. Por dicha razón se debe recurrir a la doctrina y la jurisprudencia a efectos de conocer sus alcances. García Caverio en esa misma perspectiva acota: “En la doctrina procesal, la prueba por indicios es entendida, por lo general, como aquella prueba que se dirige a convencer al órgano judicial de la verdad o certeza de hechos que no constituyen la hipótesis de incriminación, pero que, en atención a leyes científicas, reglas de la lógica o máximas de la experiencia, permiten tenerla razonablemente por cierta.

2.2.9. PRUEBA INDICIARIA E INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA

Se da en el escenario de los procesos civiles, donde su naturaleza descansa en el principio dispositivo, lo que no ocurre en el proceso penal cuya génesis de su desarrollo reposa sobre el principio acusatorio. En el proceso penal, el imputado no tiene ninguna obligación o carga probatoria y, para atribuirle responsabilidad penal, el órgano acusador (Ministerio Público), deberá presentar la prueba suficiente capaz de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste

en calidad de derecho fundamental. Consecuentemente, al no haber cargas probatorias en el proceso penal, tampoco podrá presentarse ningún caso de inversión de la carga de la prueba". Es evidente entonces, desde el principio acusatorio, que es el Fiscal quien debe recabar todos los elementos de prueba necesarios para la formulación de la hipótesis incriminatoria, por ende, no puede confundirse el uso de prueba indiciaria con la imposición de la carga de la prueba.

2.2.10. OBJETO DE LA PRUEBA

En Son las realidades que en general pueden ser probadas, con lo que se incluye todo lo que las normas jurídicas pueden establecer como supuesto fáctico, del que se deriva una consecuencia también jurídica.

El tema del objeto de la prueba busca una respuesta para la pregunta: "qué se prueba, que cosas deben probarse". Cabe ciertamente distinguir entre los juicios de hecho de los de puro derecho. Los primeros dan lugar a la prueba; los segundos, no.

Esta división elemental suministra una primera noción para el tema en estudio; regularmente, el derecho no es objeto de prueba; sólo lo es el hecho o conjunto de hechos alegados por las partes en el juicio.

✓ La prueba del derecho

Existe un estrecho vínculo entre la regla general de que el derecho no se prueba y el propio. Gral. Que consagra la presunción de su conocimiento; no tendría sentido la prueba del derecho, en un sistema en el cual éste se supone conocido. El conocimiento, se ha dicho, trae la obligatoriedad de la aplicación de la norma, como la luz proyecta la sombra del cuerpo. La regla a la inversa en el derecho griego primitivo, en el juez sólo podía sólo

podía aplicar la ley invocada y probada por las partes.

✓ **La prueba de los hechos**

La regla de que solo los hechos son objetos de prueba tiene una serie de excepciones:

La primera excepción consiste en que sólo los hechos controvertidos son objeto de prueba. Esta conclusión se apoya en la norma que establece que las pruebas deben ceñirse al asunto sobre el que se litiga, y las que no le pertenezcan serán irremisiblemente desechadas de oficio, al dictarse la sentencia. Y los asuntos sobre que se litigan son, sin duda, aquellos que han sido objeto de proposiciones contradictorias en los escritos de las partes. Asimismo, cuando el acosador ejerce sobre su víctima una insistencia en el roce físico, que con frecuencia, alcanza lo enfermizo, puede convertirse muchas veces en un directo ataque que puede generar lesiones.

Caso concreto de consecuencia física, la cual detallo: "Me enfermaba del estómago cuando oía crujir su silla - porque sabía que iba a regresar a mi escritorio de hecho tenía pesadillas en las que estaba presente este hombre (Ese qué hacía sentir a mis compañeros de trabajo (inclusive a mis compañeros de trabajo hombres) incómodos (o sea que nos afectaba a todos").

En cuanto a consecuencias económicas el efecto sobre la Productividad y el Empleo.

Es probable que la persona víctima del hostigamiento disminuya su aporte a la sociedad, así como a su propia realización personal. Es común el ausentismo o abandonar el puesto de trabajo y el tortuguismo, alta rotación de los recursos humanos, disminución de la competitividad o el desinterés por el reto en el trabajo, dada la pérdida del valor intrínseco asimismo disminución de la capacidad productiva trayendo como consecuencia perder una remuneración económica.

Caso concreto del Poder Judicial: "A veces nos dejaban solos y me decía a mí misma: qué hago, qué hago. Cogía el teléfono y simulaba que estaba hablando, diciendo sí doctor, sí, sí, sí. ¿Quién era?, preguntaba y le respondía que era un doctor que pedía información. No sé por qué aguanté tanto tiempo. Esa semana que me enfermé le dije a mi mamá: no regreso, si regreso voy a pedir que me cambien a otro sitio".

2.2.11. MEDIOS DE PRUEBA

La expresión fuente de prueba se refiere a un concepto extrajurídico, a una realidad anterior al proceso: los medios de prueba aluden a conceptos jurídicos, y sólo existen en el proceso, en cuanto en él nacen y se desarrollan. Las fuentes de prueba son los elementos que existen en la realidad, y los medios consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes al proceso. La fuente es anterior al proceso y existen independientemente de él, el medio se forma durante el proceso y pertenece a él. La fuente es lo sustancial y material: el medio, lo adjetivo y formal.

2.2.12. CLASES DE MEDIOS DE PRUEBA

Se clasifican de la siguiente manera: pruebas plenas y semiplenas, la prueba plena o completa es aquella por la que el Juez queda bien instruido para dar la sentencia; y semiplena o incompleta, la que por sí sola no instruye lo bastante para decidir. En los arts. Subsiguientes se muestran diversos tipos de pruebas:

- Por Instrumentos
- Testimoniales
- Por Peritos
- Por inspección personal del Juez

- Por Confesión
- Por Juramento
- Por presunción y semiplena

2.2.13. LA PRUEBA DE APRECIACIÓN FACULTATIVA Y LA PRUEBA DE APRECIACIÓN TAXATIVA.

✓ La prueba pre constituido y constituyente.

La primera se crea o prepara antes de la existencia del proceso y con el fin de demostrar luego en él.

La segunda viene a ser la que se produce cuando el proceso está en marcha.

- #### **✓ Las pruebas de cargo o inculpatorias** que son las que tienden a acreditar la responsabilidad penal del procesado, a vincularlo con la comisión del delito. Y las pruebas de descargo o exculpatorias que son las que vienen a desvirtuar la imputación y a establecer la inocencia del inculpado.

2.2.14. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA

Se La prueba se obtiene siempre por mediación del juez. Al ser ofrecido un medio probatorio, puede el tribunal válidamente admitir, es decir, incorporar el procedimiento propuesto, o rechazarlo (o sea negarse a la admisión).

Las razones para rechazar un medio propuesto son varias: La falta de idoneidad, falta de adecuación entre el medio o procedimiento propuesto y el dato o fuente que desea corroborarse, la impertinencia (que no se relaciona con el objeto del proceso), la extemporaneidad ofrecimiento fuera del plazo.

- Pertinencia
- Oportunidad

2.2.15. PRINCIPIOS DE LA ACTIVIDAD DE LA PRUEBA

a) Principio de libertad de prueba

Para alcanzar la verdad concreta no se requiere la utilización de un medio de prueba determinado. Todos los medios de prueba son admisibles, es decir, se puede probar con los medios de prueba típicos como también con aquellos que no han sido contemplados en la ley (atípicos) siempre y cuando no recaigan en la ilicitud.

b) Principio de pertinencia

En virtud del cual debe existir relación entre el hecho o circunstancia que se quiere acreditar con el elemento de prueba que se pretende utilizar.

c) Principio de conducencia y utilidad

Se refiere este principio a la relevancia que tienen los hechos probados, si estos van a ser útiles para resolver el caso en particular. Una razón de inutilidad de la prueba es la superabundancia, es decir, cantidad excesiva de elementos de prueba referidos al mismo hecho.

d) Principio de legitimidad

Tiene que ver con alguna prohibición o impedimento que expresamente declare el ordenamiento jurídico, procesal, respecto a un medio de prueba. Están prohibidos aquellos medios de prueba que van contra la dignidad o integridad de las personas, o que se hubieren obtenido por medios ilícitos o que violente de alguna manera los derechos de alguna de las partes.

2.2.16. SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA

- La valoración de la prueba es una operación intelectual

destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos.

- La valoración o apreciación de la prueba judicial es aquella operación que tiene como fin conocer el mérito o valor conviccional que pueda deducirse de su contenido. Se trata de una actividad procesal exclusiva del juez. Es el momento culminante y decisivo de la actividad probatoria. Su importancia es extraordinaria.
- La valoración o evaluación constituye un acto de trascendental importancia dentro del proceso y de la etapa preparatoria, dado que el resultado que se obtenga a través de él dependerá la suerte del juicio que tanto se puede traducir en la condena como en la absolución del acusado en materia criminal, como en la obtención de una justa reparación del daño sufrido o de pérdida.

2.3.TEORÍA CIENTÍFICA QUE SUSTENTA

El derecho como cualquier otra ciencia siempre se halla en una constante evolución, debido a las nuevas circunstancias y al avance propio de la sociedad en su conjunto; dentro de ese contexto, el derecho procesal contemporáneo también ha logrado, a través de los estudiosos, proponer nuevas figuras o instituciones jurídicas que promueven el avance de esta rama del derecho, entre las cuales encontramos la teoría dinámica de la carga probatoria.

Partimos de la premisa que el derecho no es inmutable, más aún cuando se busca la perfección y en nuestro caso la justicia, por ello se debe ser siempre “toreable” a los cambios, a aquellas situaciones que de alguna u otra manera permitan mejorar el sistema de justicia con instituciones que recojan el interés por lograr la justicia y la paz social.

En el derecho probatorio, en particular en lo relativo a la carga de la prueba hay quienes han propuesto establecer o fijar un principio de distribución de la carga de la prueba como una regla lógica de carácter

inmutable. En tal sentido, solo le corresponde probar a quien alega los hechos en el proceso, solo él se encuentra en la obligación y el deber de aportar aquel caudal probatorio que reafirme sus argumentos dados en la litis.

Por el contrario, bajo la premisa de la inexistencia de una verdad o un dogma en el proceso, se presenta en la corriente procesal una figura que busca desplazar a esta idea fija de la carga de la prueba por una teoría dinámica, la cual merece sea analizada, estudiada y aplicada para ser mejor entendida.

Resulta pertinente conocer previamente lo que importa la carga probatoria o del deber de probar en el proceso, y así, si el objeto del proceso es llegar al conocimiento más aproximado de la realidad de las cosas ocurridas con anterioridad al proceso resulta necesario el aporte del material probatorio en el proceso respecto de los hechos propuestos por las partes.

Visto así, la carga es “Un poder o una facultad, de ejecutar, libremente, ciertos actos o adoptar cierta conducta prevista en la norma para beneficio y en interés propios, sin sujeción ni coacción y sin que exista otro sujeto que tenga el derecho de exigir su observancia, pero cuya inobservancia acarrea consecuencias desfavorables” De otro lado, en el deber u obligación la parte se encuentra compelida a realizar determinada conducta bajo un apercibimiento o sanción en caso de su incumplimiento.

De esta manera se advierte que la noción de carga probatoria implica la existencia de una facultad que puede o no hacer uso de ella y tiene como consecuencia la pérdida de una ventaja que hubiera podido obtener a diferencia del deber en el cual, la consecuencia para quien no materializa aquel acto al que se encontraba sometido, es una sanción.

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES

- **Carga de la prueba**

Consiste en la facultad que tiene una de las partes para probar

los hechos, producto de lo cual el resultado le será favorable y de la misma manera, la inobservancia de la carga de la prueba le implicaría un resultado desfavorable.

- **Debido proceso**

Es un derecho constitucional y al mismo tiempo está conformado por un haz de derechos como el derecho al juez natural, el derecho a la defensa, el derecho a la igualdad en el proceso, a la obtención de una decisión judicial oportuna; ello en el ámbito del derecho procesal, existiendo también el debido proceso sustantivo referido a las normas de derecho material.

- **Prueba**

Es todo motivo o razón aportada al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley para llevarle al juez al convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en un proceso. Ciertos autores le asignan a la prueba el fin de establecer la verdad de los hechos y no solamente el convencimiento al juez.

- **Prueba de descargo**

Llamado también exculpatoria: es aquella que persigue acreditar la inocencia del encartado. También se le denomina contraprueba o prueba contraria.

- **Prueba de cargo o incriminatoria**

Es aquella dirigida a demostrar la culpabilidad del encartado en un hecho delictivo.

- **Valoración de la Prueba**

Es aquella operación mental que realiza la autoridad jurisdiccional con el objeto de obtener de cada elemento probatorio la suficiente convicción para determinar la culpabilidad o inocencia del imputado.

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL

HG.1: Continúa negativamente la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnerando el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal al ofrecer la carga de la prueba por no ser favorable en la investigación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha.

2.5.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS

HE.1: El representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal por ende las investigaciones son arbitrarias e irregulares.

HE.2: Si el representante del Ministerio Público actúa bajo los parámetros del principio de legalidad, entonces las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal son eficaz.

HE.3: Si el representante del Ministerio Público actúa inquisitivamente en la investigación en los procesos penales, entonces se deduce que no hay igualdad de condiciones con las pruebas de cargo y descargo en el desarrollo del proceso penal.

2.6. SISTEMA DE VARIABLES

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (VI)

Actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE (VD)

La carga de la prueba

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	INDICADORES
<p>VARIABLE INDEPENDIENTE</p> <p>Actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La percepción negativa en la investigación del imputado. • Acusación fiscal por falta de ofrecimiento de pruebas de descargo. • Tipificación inadecuada del tipo penal
<p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>La carga de la prueba</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Falta de ofrecimiento de prueba de descargo. • Falta de objetividad • Vulneración al principio de legalidad y al debido proceso.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo aplicada, porque se trata de resolver un problema de la realidad aplicando los conocimientos teóricos.

3.1.1. ENFOQUE

(Hernández, Fernández y Baptista 2014,4) en su obra Metodología de la Investigación, sostienen que todo trabajo de investigación debe sustentarse en un enfoque, por ello se ha utilizado en la presente investigación el enfoque mixto por ser un proceso sistemático, disciplinado y controlado y está directamente relacionada a los métodos de investigación utilizado como el método hermenéutico, exegético dialectico que son asociados a la investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la generalización; además se ha asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya característica es ir de lo general a lo particular. El propósito de la investigación es de explicar una investigación científica y que representan la clave y guía para determinar resultados congruentes, claros, objetivos y significativos.

3.1.2. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN

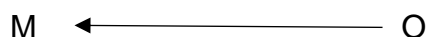
Se ha utilizado el nivel DESCRIPTIVO Y EXPLICATIVO, Por cuanto la investigación de nivel descriptivo, consistió, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado es así como el Fiscal de Fiscalía corporativa de Lauricocha viene aplicando sus requerimientos de manera

inquisitiva. Y del mismo modo el nivel explicativo trato de efectuar un proceso de abstracción como el Ministerio Público realizan sus disposiciones de requerimiento acusatorio a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. (Palacios,J,;Romero y Ñaupas,H. (2016). Pag.405).

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño utilizado es el exposfacto debido que este modelo me permitió indagar como el Fiscal quien es el titular de la acción penal al momento de realizar sus disposiciones y su requerimiento acusatorio considera o no, su medio probatorio realizado a nivel de investigación preparatoria. Es por ello que se usó este modelo lógico que me orientó a la observación, al análisis y contrastación. (Pineda & De Álvaro, 2008).

Cuyo diseño se caracteriza a la realidad del problema y cuya representación gráfica es el siguiente:



Donde:

M = Muestra.

O = Observación.

En este diseño, el investigador buscó y recogió información con respecto a los casos fenecidos (acusaciones fiscales).

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. POBLACIÓN

Estuvo conformada por 150 casos (acusaciones fiscales) correspondiente a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha 2016-2017 y 30 Abogados especialistas en materia penal.

3.2.2. MUESTRA

Estuvo determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO

de manera empírica que corresponde al 20 % que asciende el total de 30 casos (acusaciones fiscales) correspondiente a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha 2016-2017 y el 50% que asciende al total de 15 Abogados especialistas en materia penal.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Técnicas

- **Encuesta.**

Dirigida a la muestra seleccionada, observando criterios metodológicos para determinar sus términos, para lo cual, y en forma previa se elaboró el cuestionario de preguntas.

Se aplicó ítems a los Abogados especialistas en materia penal litigantes en la Provincia de Lauricocha, seleccionados de acuerdo a la muestra.

- **Documental.**

Se realizó el análisis de los casos respecto a la emisión de los requerimientos acusatorio referido a los diversos delitos que fueron denunciados en la Fiscalía Corporativa de Lauricocha, con la finalidad de reforzar la elaboración de los instrumentos.

- **Fichaje de información sobre casos.**

Se emplearon fichas de registro: bibliográficas, hemerográficas; textuales, resumen y comentario, a fin de guardar información obtenida de los diversos casos para luego analizarlas, procesarlas e interpretarlas conforme a criterios metodológicos adecuados.

Instrumentos

Cuestionario

Este instrumento me permitió aplicar una encuesta de opinión mediante el listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a los Abogados especialistas en materia penal de la ciudad de Huánuco, con la

finalidad de recoger datos informativos a cerca del nivel de conocimiento sobre la carga de la prueba y la acusación inquisitivo por parte de los Fiscales de la Fiscalía corporativa de Lauricocha.

3.4. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

a) Para el procesamiento y presentación de datos

Para la presentación y el procesamiento de datos se utilizó las técnicas estadísticas elementales, como las frecuencias absolutas y el promedio porcentual.

b) Para el análisis e interpretación de los datos

Para analizar e interpretar los datos se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, así como la frecuencia absoluta y el promedio porcentual.

c) Para la contrastación e inferencia de los resultados

Para la contratación de los resultados se utilizó tablas o cuadros y gráficos estadísticos.

d) Validación y confiabilidad del instrumento

El criterio de validez del instrumento tiene que ver con el contenido interno del instrumento, y la validez de construcción de los ítems en relación con las bases teóricas y objetivos de la investigación respetando su consistencia y coherencia técnica. Para la validación de los instrumentos de la presente investigación se ha solicitado la participación de cinco expertos, quienes analizaron los ítems del instrumento, indicando la relevancia del contenido y la claridad, luego se corrigieron las observaciones para su aplicación correspondiente.

Para determinar la confiabilidad, aplicamos el alfa de Cronbach, reemplazando el número de ítems en la presente formula.

$$\alpha = \left[\frac{K}{K - 1} \right] \cdot \left[1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_t^2} \right]$$

$$\sum_{i=1}^K \sigma_i^2$$

Es la suma de varianza de cada ítems

σ_t^2 : Es la varianza del total de filas (Varianza de la suma de los ítems).

K: Es el número de preguntas o ítems.

$$\alpha = \left[\frac{12}{12 - 1} \right] \cdot \left[1 - \frac{16,13333}{116,0444} \right]$$

$$\alpha = 0,939243$$

El alfa de Cronbach no es un estadístico al uso, por lo que no viene acompañado de ningún p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad en la escala. Sin embargo, cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la confiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superior a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Cuanto menor sea la variabilidad de respuesta por parte de los abogados, es decir haya homogeneidad en las respuestas dentro de cada ítem, mayor será el alfa de Cronbach. Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para el alfa de Cronbach:

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

CRITERIO DE CONFIABILIDAD	VALORES
Deficiente	$X < 0,5$
Regular	$0.5 < x < 0.6$
Buena	$0,6 < x < 0,7$
Muy buena	$0,7 < x < 0,9$
Excelente	$x > 0,9$

Fuente: George y Mallery (2003. P.231)

En la confiabilidad del instrumento, observamos que este reside en la escala de EXCELENTE lo que garantiza la confiabilidad de nuestro instrumento.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. RELATOS Y DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD OBSERVADA

De la realidad observada debo manifestar que en un sistema acusatorio puede definirse como aquel modelo procesal en que existe un órgano no jurisdiccional como lo es el Ministerio Público quien está encargada de la potestad del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de prueba válidas contra el sujeto agente del delito debidamente identificado.

Al Ministerio Público le corresponde la función requirente, la función de perseguir el delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba; en tanto al órgano jurisdiccional le corresponde la función decisora, la función de fallo. En esta división de roles, entre el órgano que investiga y el órgano encargado de sentenciar, en que radica la diferencia sustancial entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. El primero de los mencionados trae consigo un sistema de principios importantísimos que son sus líneas orientadoras y los pilares de su existencia; estos principios son igualdad de armas, imparcialidad judicial, contradicción, presunción de inocencia, entre otros. El sistema inquisitivo, es el modelo procesal penal opuesto al acusatorio, tiene caracteres de confusión de funciones, ausencia de imparcialidad judicial, ausencia de igualdad de armas, escrituralidad, ausencia de contradicción, reserva, presunción de culpabilidad, entre otros.

El modelo inquisitivo, plasmado en el Código de Procedimientos Penales, está siendo superado en el país, para dar paso al sistema acusatorio, a través del Nuevo Código

Procesal Penal; sin embargo, existen en este nuevo catálogo penal adjetivo, rezagos o vestigios del sistema inquisitivo, que aún no podemos desterrar, es decir encontramos, instituciones como la prueba de oficio, el interrogatorio por parte del Juez al imputado y la admisión

de medios probatorios denegados en la Audiencia de Control de Acusación, que son contrarios a los postulados y principios fundamentales que inspiran un sistema de corte acusatorio en el país; cuya finalidad es dar mayores luces respecto a este polémico tema, en aras de mejorar la justicia por parte de los órganos jurisdiccionales.

En la investigación se ha demostrado la vulneración e incongruencia que genera la presencia de rasgos inquisitivos en las funciones del Juez durante el Juicio Oral; específicamente, determinando si las prerrogativas de corte inquisitivo que le otorgan al Juez I, desnaturalizando al nuevo modelo procesal de corte acusatorio con tendencia adversarial.

En la investigación se ha desarrollado, técnicas como el acopio documental, el fichaje, la interpretación normativa, y la entrevista. Respecto a esta última, referimos que está conformada por preguntas, las cuales tienen como finalidad demostrar la impertinencia de las facultades inquisitivas de las que gozan los Jueces de Juzgamiento, conforme al nuevo modelo procesal penal peruano.

En la investigación, arribamos a conclusiones que dieron por válida nuestra hipótesis, así como corroboraron nuestros objetivos cuando las actuaciones inquisitivas despojan de su imparcialidad al juzgador; sin embargo en el sistema acusatorio opera solo un Juez imparcial, siendo este un órgano supra partes, que debe decidir en base a los medios probatorios ofrecidos por los sujetos procesales pertinentes, pues como prescribe la ley es el Fiscal quien tiene la carga de la prueba, es decir una vez que el Fiscal formula acusación, debe procurarse del máximo los medios probatorios para demostrar la culpabilidad del acusado, pues este no tiene que probar nada al asistirle la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental. Y si las pruebas de la Fiscalía no son contundentes, deberá absolver ya que existe en él duda sobre la culpabilidad y no certeza de esta. Pues el proceso acusatorio, es un modelo en el que las partes que son actores de la misma deben estar absolutamente preparadas para cumplir la función que les corresponde, por tanto, si un Fiscal no ofrece los medios probatorios correctos o si no hace el interrogatorio bajo las reglas de la litigación

oral para demostrar la culpabilidad en Juicio del acusado, simplemente debería subestimarse el caso a causa de su escasa preparación y diligencia al investigar.

Demostramos que el Juez no puede ofrecer pruebas, porque si éste tuviera ésta facultad, se desataría de su investidura de Juez imparcial (a nivel de juzgamiento debe ser un tercero imparcial) y pasaría a convertirse en un Juez contaminado, el cual estaría tras la búsqueda de su verdad; él solo debería valorar las pruebas ofrecidas por las partes durante la Etapa Intermedia (Audiencia de Control de Acusación), las cuales, mediante debate oral y contradictorio, han sido admitidas por el Juez de la Investigación Preparatoria.

4.1.1. CONJUNTO DE ARGUMENTOS ORGANIZADOS

El CPP-2004 es una herramienta legal que se dio en atención a presiones internas y externas. A nivel nacional es evidente la alarmante situación en la que se encuentra la administración de justicia penal: sobrecarga procesal, lentitud de los procesos, trámites atentatorios de los derechos fundamentales de los procesados, olvido e indefensión de las víctimas, altos índices de corrupción, impunidad, desconfianza de la sociedad en el sistema de justicia, etc. A nivel internacional, la mayoría de países de la región han adoptado un sistema procesal acusatorio para enfrentar los conflictos derivados del delito.

El proceso de implementación gradual del CPP-2004 comenzó en el año 2006 y se tiene programado que en el año 2012 entre en vigencia por completo a nivel nacional. A la fecha, los Distritos Judiciales de Huaura, La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Ica, Cañete, Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco, Madre de Dios, Cajamarca, Amazonas y San Martín ya vienen aplicando dicho código, con resultados estadísticos positivos.

El CPP-2004 implica una clara separación y delimitación de funciones por parte de los sujetos procesales en las diversas etapas del proceso penal. De modo tal, que el fiscal es el director de la investigación preparatoria, la cual realiza con el apoyo de la policía, es el titular de la acción penal pública y hace las veces de parte acusadora

en el juicio oral. El juez de la investigación preparatoria controla que las diligencias del fiscal no afecten injustificada ni desproporcionadamente los derechos fundamentales de los investigados y sirve de filtro para pasar a juicio oral. El abogado del imputado ejerce la defensa irrestricta del imputado, exigiendo el respeto de sus derechos fundamentales y contradiciendo la imputación fiscal. En el juzgamiento interviene el juez penal, que puede ser unipersonal o colegiado, y que decidirá acerca de la responsabilidad o inocencia del acusado.

El proceso común cuenta con tres etapas: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. El CPP-2004 también establece procesos especiales, como son: el proceso inmediato, el proceso por delitos de función, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, el proceso de terminación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas.

La investigación preparatoria tiene dos sub-fases: las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada. Las primeras tienen un plazo de 20 días u otro que fije el fiscal atendiendo a las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, y tienen por finalidad determinar el carácter delictuoso del hecho investigado e individualizar a los presuntos autores y a los agraviados. Por su parte, la investigación preparatoria formalizada tiene un plazo de 120 días prorrogables a 60 y en los casos complejos puede durar hasta 8 meses prorrogables por igual plazo, y su finalidad es reunir los elementos de convicción a fin de sustentar la acusación o, de ser el caso, solicitar el sobreseimiento.

La investigación preparatoria es dirigida por el fiscal y consiste en la recolección de informaciones, datos, evidencias, indicios y demás elementos que le sirvan para crearle certeza respecto a la existencia de un delito y de la responsabilidad de sus autores. Dicha labor la realiza con el apoyo de la policía, la cual está obligada a ello por mandato constitucional.

La Policía Nacional, como órgano técnico auxiliar, debe de realizar bajo la dirección del fiscal una investigación objetiva, es decir,

destinada a la ubicación, identificación, fijación, análisis y procesamiento de las evidencias y testimonios, a través de métodos objetivos, sean técnicos o científicos, aplicando los procedimientos que aseguren la autenticidad del objeto y la veracidad de los hechos, dejando de lado todo elemento subjetivo o prejuicioso. Para ello, se requiere que los efectivos policiales sean especialistas, tanto en la investigación de campo (para establecer los hechos y ubicar y recolectar los elementos materiales de prueba), como en la investigación técnica o científica, con la finalidad de indagar sobre aspectos esenciales del hecho investigado.

El fiscal no está obligado a realizar una investigación de campo o técnica, sino a agregarle valor jurídico a la misma: orientando o reorientando, sea en forma general o particular y concreta, los procedimientos de búsqueda con base en los elementos del delito, controlando el cumplimiento de los mismos, sirviendo de enlace con el juez al solicitar la autorización para la restricción de los derechos fundamentales, valorando la investigación para determinar si se cumplieron los procedimientos, si es objetiva y si presta o no mérito jurídico para ejercer la acción penal mediante la acusación u otra forma alternativa, o si se debe solicitar preclusión. Esto por supuesto no excluye, cuando así lo estime necesario el fiscal en cada caso concreto, la participación directa en una actuación para tener un panorama o visión del caso. En suma, el fiscal es el director objetivo de la investigación preparatoria.

En consecuencia, el fiscal debe apoyarse en los efectivos policiales para desarrollar la investigación del delito y paralelamente capacitarse y adquirir la experiencia técnica que le dé mayores luces al momento de planificar su estrategia de investigación.

Como lo hemos expresado líneas atrás, no podemos hablar de jerarquías entre los integrantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional, pues fiscal y policía pertenecen a instituciones distintas. De lo que debe hablarse es de roles funcionales, cuyo cumplimiento y eficiencia depende de la capacidad de coordinación de los miembros de las mencionadas entidades.

Cabe reiterar que el CPP-2004 no resta ni perjudica las atribuciones de la policía, tan sólo regula lo que la Constitución Política de 1993 ya establecía: la dirección de la investigación criminal a cargo del fiscal, quien ejercerá el control y conducción de los actos investigatorios. Con este nuevo sistema acusatorio se busca eliminar malas prácticas, tales como, que el efectivo policial instructor califique jurídicamente el hecho investigado, que las denuncias se archiven o desaparezcan de las dependencias policiales, que las investigaciones no tengan plazo límite de duración, que el imputado declare sin abogado, sea maltratado física o psicológicamente o se vea afectado en algún otro derecho fundamental, etc.

Visto de este modo, sólo queda superar los débiles argumentos en su mayoría políticos que pretenden deslizar la idea de que las disposiciones contenidas en el nuevo código adjetivo recortan o afectan las funciones de la Policía en la investigación del delito. A través del Proyecto de Ley N° 3205/2008 se propuso modificar diversos artículos del Decreto Legislativo N° 957 (CPP-2004), afortunadamente dicho proyecto no fue aprobado por el Congreso de la República y las relaciones entre los integrantes del Ministerio Público y los miembros de la Policía Nacional no se han visto perjudicadas en lo absoluto y se aspira a realizar una labor coordinada y conjunta en la lucha contra la criminalidad.

4.1.2. ENTREVISTAS, ESTADÍGRAFOS Y ESTUDIOS DE CASO

Después de aplicar los instrumentos, a los 15 abogados de la Fiscalía Corporativa de la Provincia de Lauricocha, 2016-2017, que constituyeron nuestra materia de estudio, en el presente trabajo de investigación, se procedió a la tabulación de los datos. Los resultados se han sistematizado en cuadros, tablas y gráficos y según las encuestas realizadas para finalizar con la prueba de hipótesis.

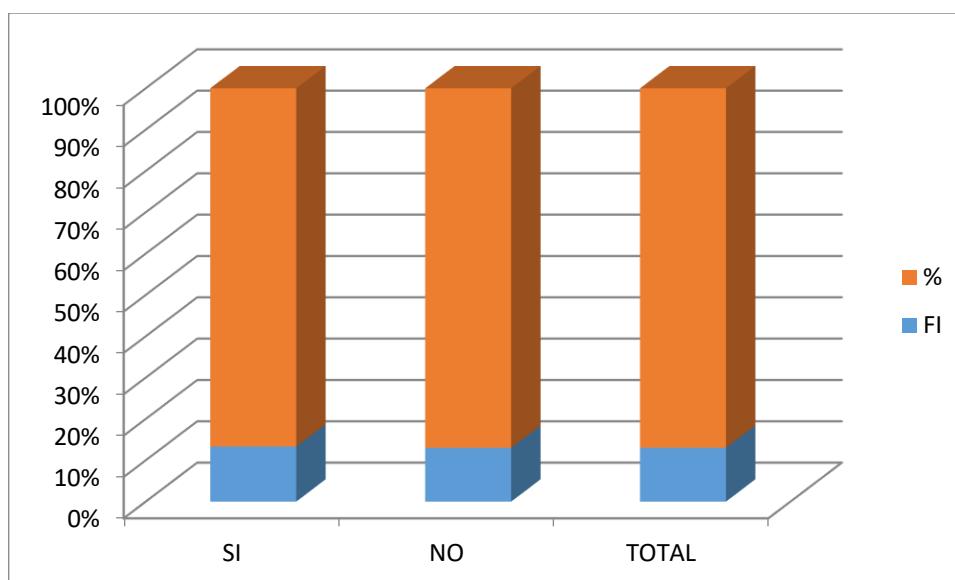
Análisis e interpretación de los resultados en cuadros y gráficos. Después de haber tabulado los resultados obtenidos a través del cuestionario, aplicado a nuestra muestra de estudio, se obtuvieron los siguientes resultados ordenados de la siguiente manera.

4.1.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS DE LA FISCALÍA CORPORATIVA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO 2016-2017

Tabla N° 1 ¿Para usted, desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?

ITEM	fi	%
SI	2	13
NO	13	87
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 1 ¿Para usted, desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

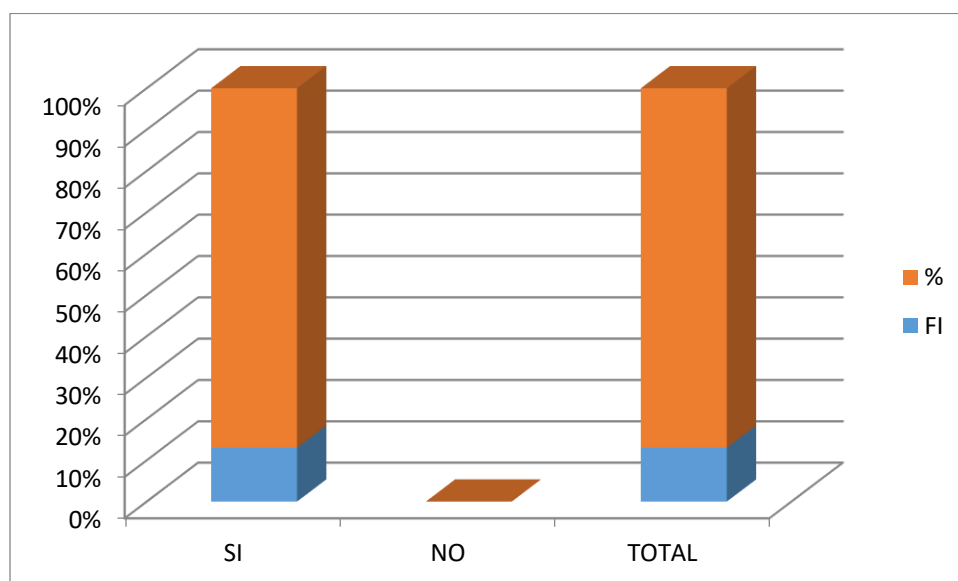
A la pregunta: ¿Para usted desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?

De los encuestados, el 87 % consideran que no existe un derecho constitucional que exista instituciones relacionados a la prueba de cargo y de descargo, lo que refleja abuso de poder por parte del Ministerio Público y el 13 % consideran que si existe un derecho constitucional relacionados instituciones a la prueba de cargo y de descargo.

Tabla Nº 2 ¿Para usted los medios de prueba, en materia penal solamente se le confieren únicamente al Ministerio Público?

ITEM	fi	%
SI	15	100
NO	00	0
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico Nº 2 ¿Para usted los medios de prueba, en materia penal solamente se le confieren únicamente al Ministerio Público?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

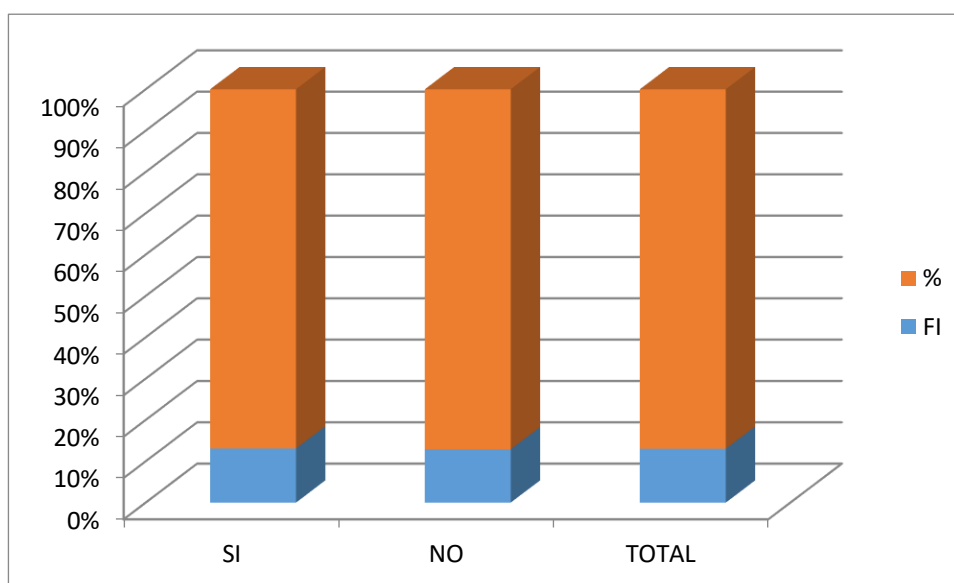
A la pregunta: ¿Para usted el tema de necesidad de la prueba, en materia penal solamente se le confiere al Ministerio Público?

De los encuestados, el 100 % respondió que sí existe la necesidad de la prueba en materia penal, por cuanto que el Ministerio Público es el único al cual se le confiere la prueba por ser titular de acción penal, el cual se presenta como medio de prueba en los procesos penales para presumir la inocencia o culpabilidad del investigado cuando por la sola existencia de indicios de la comisión de un delito se acusa.

Tabla N° 3 ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?

ITEM	fi	%
SI	11	73
NO	4	27
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 3 ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

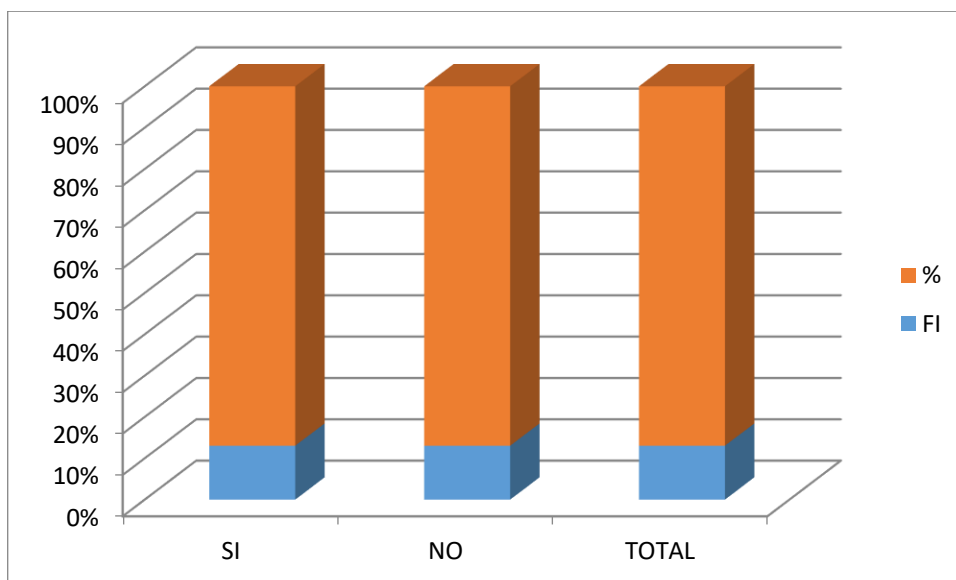
A la pregunta: ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?

De los encuestados, el 73 % respondió que sí cuando existe la repercusión procesal, en todos los casos se le niega el derecho a la prueba y es por ende donde se vulnera el derecho de defensa lo que refleja que las respuestas de los profesionales tienen gran repercusión procesal, lo cual si se puede manifestar que a los justiciables se le niega el derecho a la prueba y se vulnera el derecho de defensa

Tabla N° 4 ¿Para usted su modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba?

ITEM	fi	%
SI	6	40
NO	9	60
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 4 ¿Para usted su modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

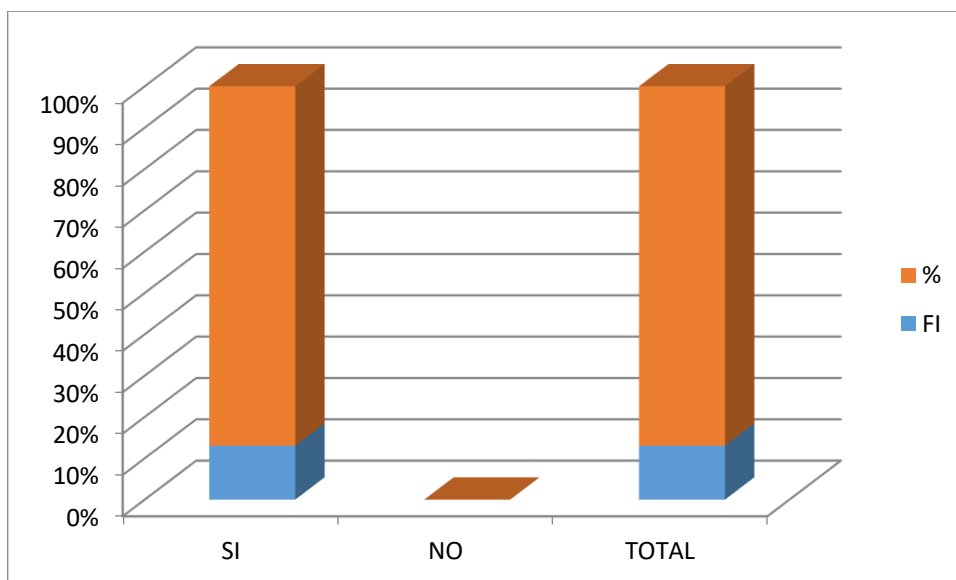
A la pregunta: ¿Para usted a tu modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba o no en las etapas del proceso penal?

De los encuestados, el 60 % respondió que no debe ingresar como prueba penal obtenida de forma ilícita por cuanto que el reconocimiento la inspección judicial y la reconstrucción y las pruebas especiales deben ser medio de prueba idóneos y debidamente probada para ser discutidas en la etapa del proceso penal y el 40% manifiestan que la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba en las etapas del proceso penal.

Tabla Nº 5 ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba?

ITEM	fi	%
SI	15	100
NO	0	0
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5 ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

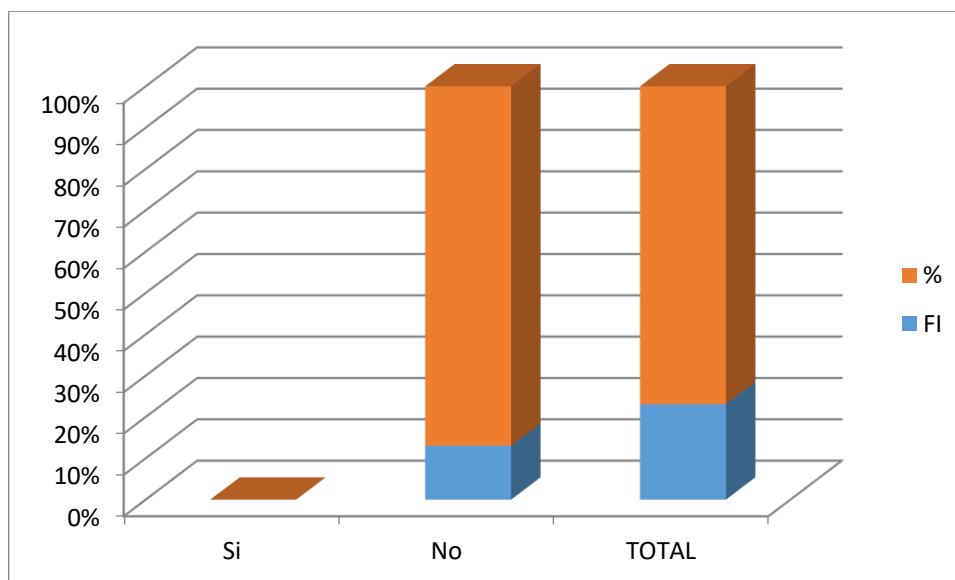
A la interrogante: ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba?

De los encuestados, el 100 % respondió que si los testigos tienen derecho a la prueba lo que ocurre es que el testigo por ser una persona ajena al delito y que tiene la misión de colaborar con la justicia no puede quedar en abandono del derecho de defensa No se trata de restringir las amplias facultades que tiene el imputado sobre todo en el sistema acusatorio, sino más bien ampliar el derecho a los demás sujetos procesales estén vinculados al delito.

Tabla N° 6 ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?

ITEM	fi	%
Si		00
No	15	100
TOTAL	30	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 6 ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

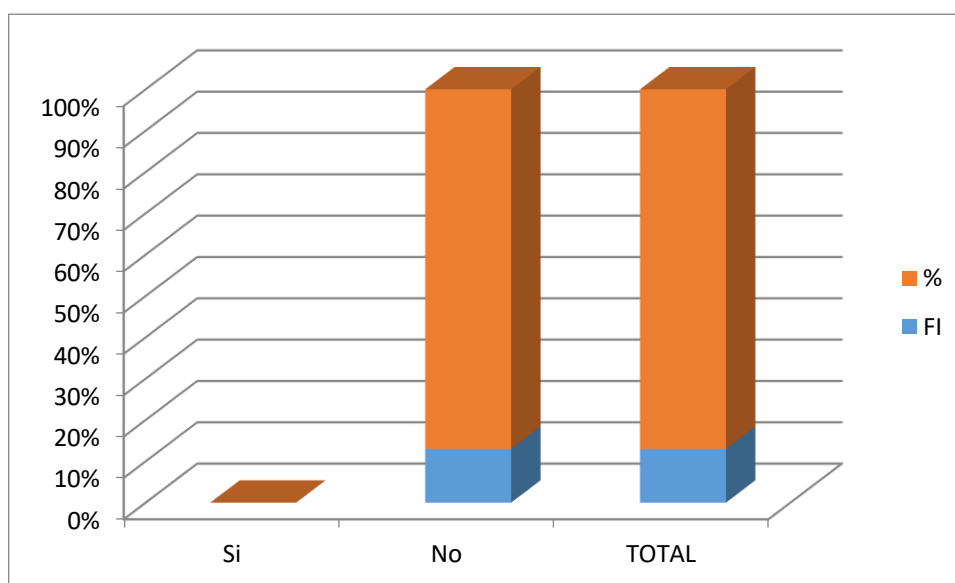
A la pregunta: ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?

¿De los encuestados, el 100 % respondió que el Fiscal no puede abstenerse de buscar la prueba penal por ser el titular de la acción penal y tiene la obligación que todo medio de prueba será valorado sólo si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo siempre en cuando no carecen de efecto legal las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Sin la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio.

Tabla N° 7 ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, son susceptibles de ser objeto de prueba?

ITEM	fi	%
Si	0	0
No	15	100
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 7 ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, son susceptibles de ser objeto de prueba?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

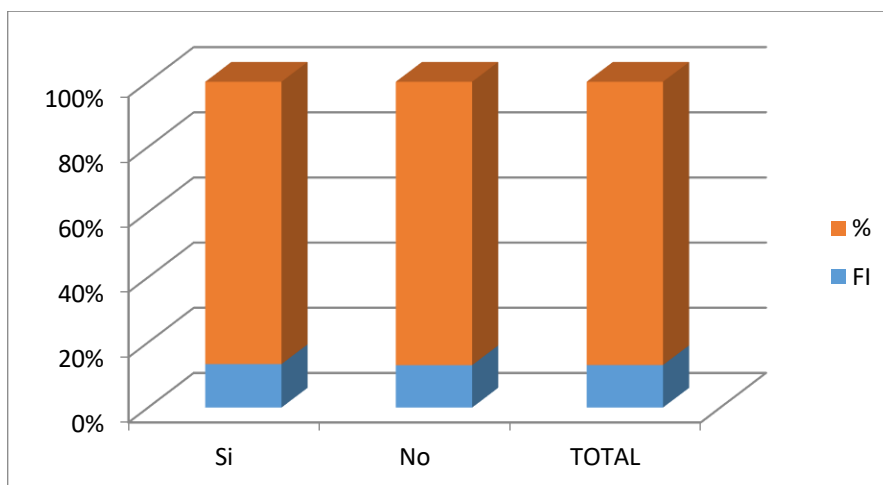
A la pregunta: ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, son susceptibles de ser objeto de prueba?

De los encuestados, el 100 % respondió, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, no son susceptibles de ser objeto de prueba

Tabla Nº 8 ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?

ITEM	fi	%
Si	02	13
No	13	87
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 8 ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

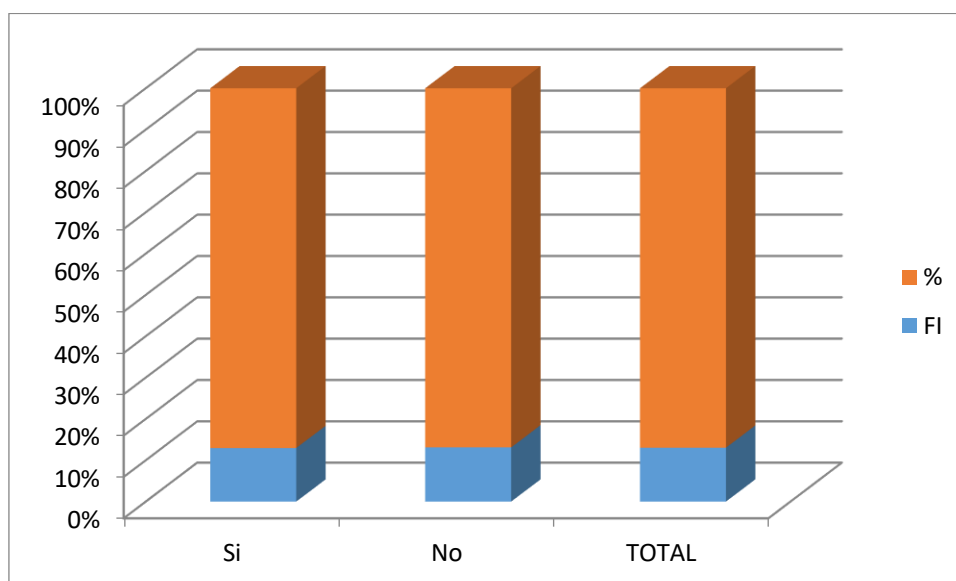
A la pregunta: ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?

De los encuestados, el 87 % respondió, que juzgador al momento de resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, no se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica y el 13% manifiestan que si el juzgar al momento de resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica.

Tabla N° 9 ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba?

ITEM	fi	%
Si	7	47
No	8	53
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 9 ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba?

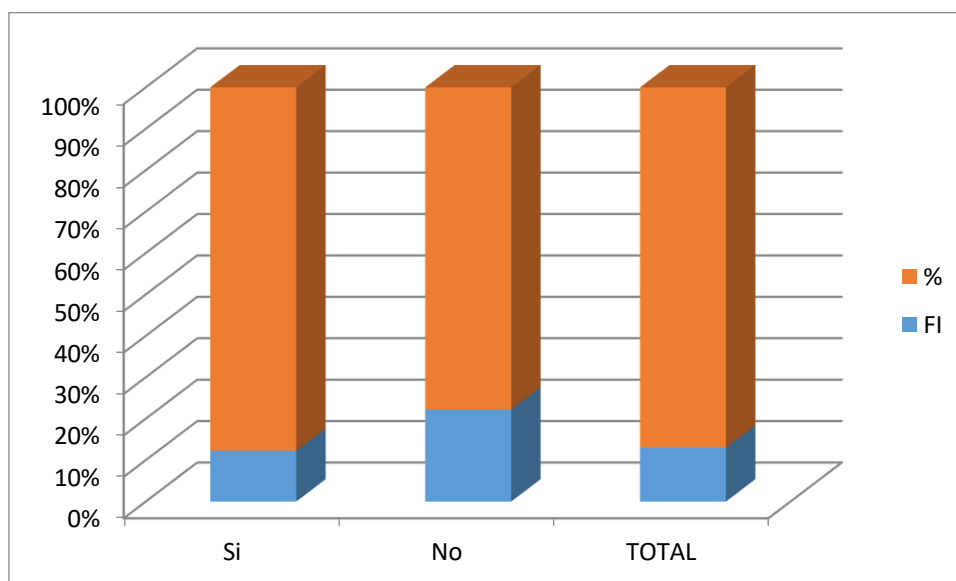
ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta: ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba? De los encuestados, el 53% respondió, que no y el 47 % respondió que sí, lo que refleja que existen criterios divididos por parte de los profesionales, teniendo mayor porcentaje la negativa en la valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba.

Tabla N° 10 ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?

ITEM	fi	%
Si	13	93
No	2	7
TOTAL	15	100

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 10 ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta: ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?

De los encuestados, el 93 % respondió, que sí, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo. Y el 7% manifiestan que, si existe en el proceso inmediato que el justiciable no se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo.

4.1.4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE CASOS

Tabla Nº 11 Escala de Valoración

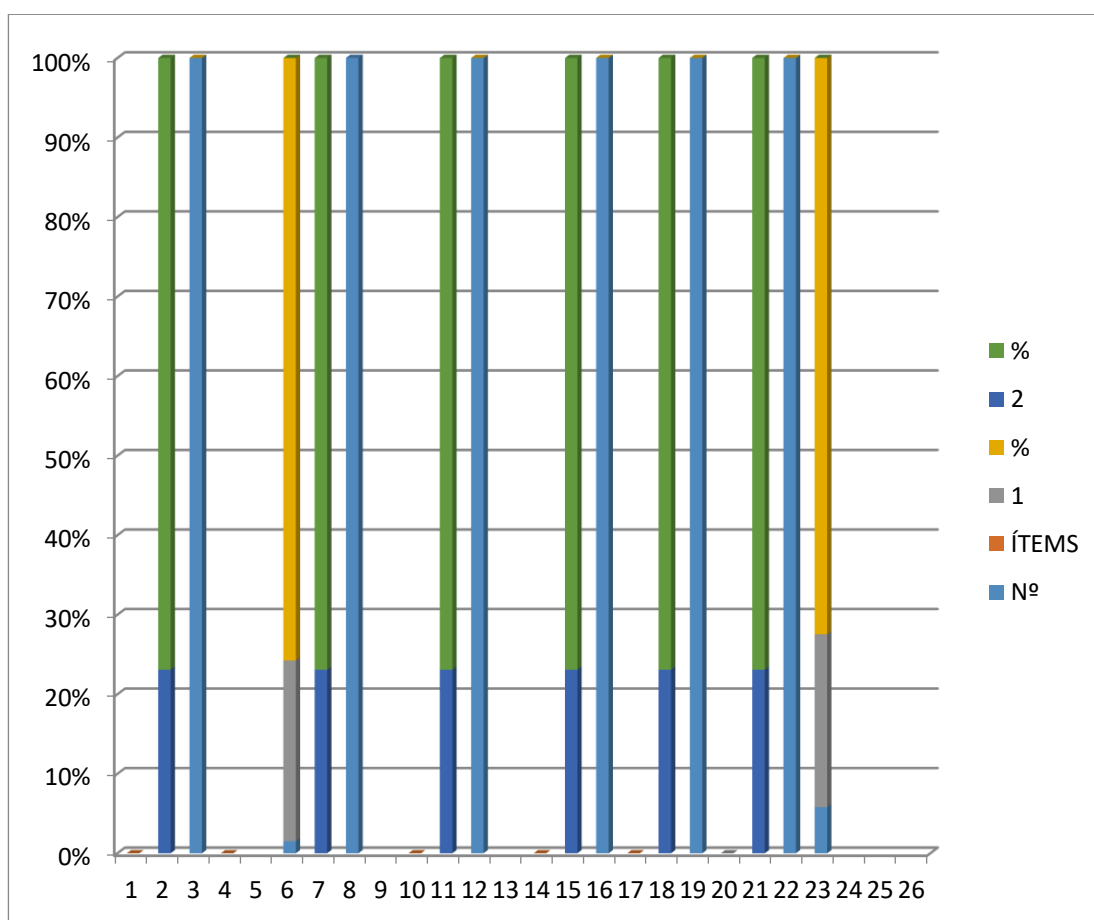
1 = Si

2 = No

Nº	ÍTEMS	1	%	2	%
1	El Ministerio Público de Lauricocha al momento de solicitar su requerimiento de acusación tomó en consideración los presupuestos establecidos en el artículo 344° CPP	0	0	30	100
2	El Ministerio Público de Lauricocha solicito su requerimiento de acusación por que ha concluido con la investigación o el juez de la investigación preparatoria así lo determinó	30	100	0	0
3	En la carpeta fiscal existen elementos de convicción suficientes para que el Ministerio Público de Lauricocha solicite el requerimiento de acusación.	0	0	30	100
4	En su requerimiento de acusación del Ministerio Público contiene una especie de promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado, así como la responsabilidad penal del imputado serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio, luego que se actúe la prueba por las partes	0	0	30	100
5	Su requerimiento de acusación del Ministerio Público está siendo interpretado y aplicado correctamente por el Juzgado de Investigación Preparatoria	0	0	30	100
6	El Ministerio Público requiere su acusación teniendo en cuenta indicios razonables que los llevase a sospechar la existencia de un delito	0	0	30	100

7	El Ministerio Público al requerir su acusación tuvo en consideración la finalidad de la investigación.	0	0	30	100
8	El Ministerio Público al requerir su acusación ha vulnerado la presunción de inocencia del procesado.	30	100	0	0

Fuente: Elaboración propia.



Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 11 Análisis de resultados

ANÁLISIS DE RESULTADOS

LUEGO DE REVISAR POR MUESTREO, 30 CASOS (Disposiciones de requerimiento de acusación), LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUIENTES:

- De acuerdo al análisis realizado de los casos (providencias de requerimiento de acusación) el Ministerio Público de Lauricocha al momento de solicitar su requerimiento de acusación no toma en consideración los presupuestos establecidos en el artículo 344° CPP, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (providencias de requerimiento de acusación) el Ministerio Público de Lauricocha solicitó su requerimiento acusatorio por haber concluido la investigación, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (providencias de requerimiento de acusación). En la carpeta fiscal se observa que no existen elementos de convicción suficientes para que el Ministerio Público de Lauricocha solicite el requerimiento de acusación, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (providencias de requerimiento de acusación) el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lauricocha en su requerimiento de acusación del Ministerio Público no contiene una especie de promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado, así como la responsabilidad penal del imputado no serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio, luego que se actúe la prueba por las partes, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (disposiciones de requerimiento acusatorio). Su requerimiento de acusación del Ministerio Público no está siendo interpretado y aplicado correctamente por el Juzgado de Investigación Preparatoria, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (disposiciones de requerimiento acusatorio). El Ministerio Público no requiere su

acusación teniendo en cuenta indicios razonables que los llevase a sospechar la existencia de un delito la prisión preventiva no está siendo interpretado y aplicado correctamente por el Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, lo que equivale al 100%.

- De acuerdo al análisis realizado de los casos (disposiciones de requerimiento acusatorio). El Ministerio Público al requerir su acusación no tuvo en consideración la finalidad de la investigación, lo que equivale al 100%.
- De acuerdo al análisis realizado de los casos (disposiciones de requerimiento acusatorio). El Ministerio Público al requerir su acusación si ha vulnerado la presunción de inocencia del procesado, lo que equivale al 100%.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA

El panorama que hemos intentado trazar de los encuentros y desencuentros del cambio del sistema procesal penal, obviamente no puede agotarse en el estudio y análisis de las disposiciones o providencias. Es cierto que resulta esencial reconocer que toda óptica saludable de reforma del proceso penal parte de afirmar su función cognoscitiva, introducir la vigencia efectiva del principio de igualdad de armas y del conjunto de garantías que disciplinan un enjuiciamiento bajo las reglas de publicidad, oralidad, intermediación y contradicción efectiva, lo cual implica construir un proceso con profundos rasgos acusatorios. Sin embargo, los Fiscales, del sistema de justicia penal dentro del cual se incardina, no puede ser completo si no se tiene presente, en primer lugar, cómo funciona el soporte administrativo que sustenta al aparato judicial y el Ministerio Público.

La estrategia de cambio debe ser multidisciplinaria, porque la justicia penal está caracterizada en todos los países como una institución en crisis sin capacidad para afrontar la congestión de casos en los despachos Fiscales, lo cual resulta en una creciente lentitud de los procesos y en una pobre imagen ante el público. Que las respuestas tradicionales a la crisis judicial (reformas legales y aumento de la plantilla judicial) son insuficientes y erráticas, pues si bien son importantes las reformas legales y quizá sea necesario aumentar el número de fiscales y jueces, lo esencial para el éxito de dichas medidas, a las que se suma el incremento presupuestario y una adecuada planificación, es que deben darse primero bajo un contexto de racionalización administrativa, lo que se denomina "reformas en la administración de los sistemas judiciales", en el que los cambios respondan a realidades operativas del sistema judicial, y segundo con el concurso y cooperación armónica de los otros dos poderes del Estado: se requieren algunas reformas legales, que debe dictar el

Congreso, y el apoyo financiero y la cooperación técnica del Ejecutivo (El Poder Judicial en la década de los ochenta: aspectos administrativos).

El Fiscal debe tener en cuenta en el tema de valoración y carga de la prueba en el proceso penal peruano como fundamento legal, donde establece que “el Fiscal es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba...”, “...la valoración probatoria respetará las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos...”, respecto de la carga de la prueba a desarrollar , esta institución aparece en el derecho romano como una institución del derecho procesal civil, esto es quien alega un hecho debe de probarlo; pasando también a ser institución del proceso penal, esto es, quien acusa un delito debe de probar la responsabilidad del acusado, a través de la carga de la prueba, dado que si no hay prueba, así el acusado no pruebe su inocencia con pruebas de descargo está protegido por el principio de inocencia. En lo que respecta al tema de valoración de la prueba, que le corresponde al juzgador conforme se detalla, existen varios sistemas de valoración de la prueba que los sistemas jurídicos en materia penal lo han utilizado, lo utilizan o lo dejarán de utilizar, conforme a sus orientaciones sociales, jurídicas y políticas, que podrían ser el sistema de prueba legal, de libre convicción o de sana crítica.

El Fiscal conoce sobre la prueba penal en lo que respecta a la relación de esta institución, con la carga de la prueba penal y con su valoración el fiscal tendrá mejor criterio en el caso de imputar, al formular su acusación, toda vez que la formación académica del fiscal respecto de la carga de la prueba y valoración de la prueba sea realizada con una parte teórica y la otra analizando la casuística nacional y comparada sobre la materia.

El tema de valoración y carga de la prueba son instituciones del derecho procesal penal, los mismos que a través de la historia de la humanidad, el tema de la criminalidad han sido tratados de acuerdo al sistema social, jurídico y político de su momento, edad antigua, media,

contemporánea y moderna; nuestra legislación procesal penal no ha sido ajeno a ello puesto que si se analiza el código de enjuiciamiento criminal, el código de procedimientos penales, así como el nuevo código procesal penal veremos que en nuestro sistema jurídico nacional se aplicó en su momento el sistema de valoración legal de la prueba, el sistema de la libre convicción de la valoración de prueba o criterio de conciencia, y últimamente el sistema de la sana crítica. Cada uno de los sistemas de valoración de la prueba antes señalado se están analizando independientemente unas de otras, indicando en ellas la parte positiva y negativa de estos sistemas, por ejemplo en la prueba legal o tasada se indica que el juez en lo que respecta a la valoración de la prueba vendría a ser boca del legislador, y en lo relacionado a la carga de la prueba si bien es cierto que en el Fiscal recae la carga de la prueba, pero no es exclusivo del Fiscal, sino que, también puede hacer uso de esta institución los otros sujetos procesales, entre ellos el justiciable, con su carga de la prueba de descargo.

5.2. SUSTENTACIÓN CONSISTENTE Y COHERENTE DE SU PROPUESTA

Es necesario realizar la confrontación de la situación problemática planteada, de las bases teóricas y de la hipótesis propuesta, con los resultados obtenidos; subsecuentemente, se confirma que: Continúa negativamente la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnerando el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal al ofrecer la carga de la prueba por no ser favorable en la investigación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, esto significa que el fiscal actúa de manera inquisitiva su investigación no satisfactoria para la defensa técnica y para el imputado, donde se ha creado insatisfacción en sus disposiciones de requerimiento acusatorio porque no tiene en consideración la prueba de descargo.

La interrogante que nos hemos formulado al iniciar el trabajo es: ¿En qué medida la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal

Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha?

Luego de haber concluido la investigación y a la luz de los resultados se pudo determinar qué: El actuar inquisitivamente del representante del Ministerio Público vulnera el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, no cumplirán de manera satisfactoria al momento de solicitar su requerimiento acusatorio en su disposición, por no tener en cuenta su prueba de cargo y de descargo lo que establece la norma. Tal como se evidencia en los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la presente tesis.

5.3. PROPUESTA DE NUEVAS HIPÓTESIS

Después de haber concluido con el desarrollo de la investigación, sobre NECESIDAD DE REGULACION EN LA ACTUACIÓN INQUISITIVA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL EN LA FISCALIA CORPORATIVA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA 2016-2017", considero trascendental de importancia el presente trabajo, por que sienta un precedente científico y académico respecto como debe reorientarse ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico procesal, en lo que se refiere a este tema, materia de investigación, existen demasiadas limitaciones por parte del Fiscal y eso lleva a la inadecuada administración de justicia y por consiguiente vulnera el derecho de los justiciables e influye en la inseguridad jurídica como hemos observado en las disposiciones fiscales a través de los resultados del presente trabajo de investigación, la no asignación de carga probatoria al imputado dentro de los principios de inmediación y disponibilidad conlleva a la impunidad con detrimento de la justicia y de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Por consiguiente, constituye un aporte científico que puede ser tomado como un antecedente en la formulación de teorías ulteriores respecto a este tema, además porque su tratamiento fue llevado a través del método científico, siguiendo en consecuencia todas sus

etapas y pasos para su validación como tal.

Por ende, propongo que el Ministerio Público debe ser un organismo autónomo del Estado que tiene como función principal la defensa de la legalidad, los derechos de los ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil. También velar por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación.

CONCLUSIONES

1. Se ha determinado que la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público ha vulnerado el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal Penal sobre la carga de la prueba en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha, porque no se tuvo en cuenta la carga dinámica de la prueba por ser una necesidad para evitar la impunidad en la administración de justicia penal para lo cual se requiere disposición expresa que la regule que existe de hecho en la práctica y en disposiciones sustantivas del derecho nacional.
2. Se ha llegado a conocer que la investigación del imputado no es favorable cuando el representante del Ministerio Público actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal de manera inquisitiva violando los derechos fundamentales a pesar de la existencia de instrumentos y mecanismos como está establecido en el código el responsable de la carga de la prueba por mandato constitucional (artículo 159.1° y 5°) por ser titular de la acción penal, por lo que está justificada legislativamente.
3. Se ha llegado a conocer en las carpetas fiscales de las investigaciones realizadas por el Fiscal a los investigados por los diversos delitos no actúa con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal de acuerdo a los instrumentos aplicados de acuerdo a la muestra de estudios.
4. Se ha llegado a saber que el fiscal siendo el titular de la acción penal no evita la actuación inquisitiva al no actuar en igualdad de condiciones sobre las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal, en la presunción de ilicitud, al ser un indicio requiere ser valorada con otros indicios de acuerdo al artículo 158 del Nuevo Código Procesal Penal o con otros medios de prueba, por lo que inferir que el simple indicio de ilicitud es prueba suficiente de la comisión del delito es ilegal por insuficiencia probatoria e inconstitucional por no corresponder al principio de presunción de inocencia (la prueba indiciaria no se opone a la presunción de inocencia pues requiere siempre una actividad probatoria complementaria para generar convicción de culpabilidad).

Porque nuestro sistema penal no sanciona al imputado por la obstrucción probatoria, como sí lo hace a terceros en los artículos 409-A.- 405 del Código Penal, consideramos que la mala fe procesal y la conducta obstruccionista dentro del proceso debe ser sancionado

RECOMENDACIONES

1. Proponer ante la Legislatura la modificación legislativa del código Procesal Penal de 2004, imponiendo la carga de la prueba al imputado, sustentando en los principios de inmediación y disponibilidad.
2. Proponer la modificación de los art IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal de 2004, así como los artículos 71 Inciso 2° adicionándole el Literal “g” con los siguientes textos:
Artículo IV.-Titular de la Acción Penal y de la Prueba:
 - ❖ Inciso 1°. - “El Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba salvo en aquellos casos en el que el imputado tenga inmediación y disponibilidad de los medios de prueba”.
 - ❖ Artículo 71.- DERECHOS DE IMPUTADO Inciso 2°. “g”. - “El imputado, debe proporcionar los medios de prueba por inmediación y disponibilidad de los mismos”.
3. Al Ministerio Público evitar la defensa obstruccionista, dilatoria, guardar silencio y ocultar, destrucción de los medios de prueba como parte de la estrategia de defensa por el imputado, como suele ocurrir en las fiscalías corporativas de Lauricocha hace que gran parte de los procesos penales concluyen con impunidad y consecuente deterioro de la credibilidad no solo de la víctima sino de los ciudadanos, entonces sufre la justicia y la seguridad jurídica.
4. Al Ministerio Público realizar una investigación que resulte acorde a nuestro nuevo sistema de administración de justicia penal, y que contribuya en la lucha contra la impunidad para ello es necesario la inversión de la carga de la prueba, sustentando en los principios de inmediación y disponibilidad.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- AVALOS RODRÍGUEZ, Constante Carlos, (2013) LA DECISIÓN FISCAL EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL GACETA PENAL. Primera edición-Lima.
- BAGRE Aldo, TEORÍA GENERAL DEL PROCESO. T. I, ABELEDO PEROUT. Buenos Aires. TOMO I.
- CASTRO ALVA, José Luis, (2002) "PRINCIPIOS DE DERECHO PENAL- PARTE GENERAL" - GACETA JURÍDICA - Primera edición Febrero.
- CABANELLAS, Guillermo. (1962) DICCIONARIO DE DERECHO USUAL Editorial Santillana. Quinta Edición. Buenos Aires.
- CARRIÓN LUGO, Jorge (2000) TRATADO DE DERECHO PROCESAL Civil TOMO I. GRIJLEY. Lima.
- CUBAS VILLANUEVA, Víctor, (2009) "INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN PREPARATORIA". Gaceta Jurídica - Lima.
- FERRAJOLI. Luigi, (1995) "DERECHO Y RAZÓN" Editorial TROTTA S.A. Madrid.
- GÓMEZ C. Juan Luis. (1999) "EL PROCESO PENAL EN EL ESTADO DE DERECHO". Palestra SRL Lima.
- GACETA JURÍDICA, (2013) CÓDIGO PROCESAL CIVIL COMENTADO Primera Edición.
- GACETA JURÍDICA, (2013) EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD Primera Edición. Lima.
- GACETA JURÍDICA, (2006) LA CONSTITUCIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Primera Edición. Lima.
- GACETA JURÍDICA, (2005) CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, Obra Colectiva escrito por más 117 destacadas juristas del país,

Walter Gutiérrez director, LA CONSTITUCIÓN COMENTADA, Análisis artículo por artículo, T. I- II-, 1a Edc, Diciembre.

- GACETA JURÍDICA (2012) "LA PRUEBA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004" - GACETA PENAL & PROCESAL PFNAI - Primera Edición Junio.
- GACETA JURÍDICA, (2012) "DIÁLOGOS CON LA JURISPRUDENCIA" Primer Edición, julio.
- GACETA JURÍDICA, (2011) ACTUALIDAD JURÍDICA "Información especializada para abogados y jueces". Gaceta Jurídica, Rev., Tomo 208 marzo.
- DIÁLOGOS CON LA JURISPRUDENCIA" (2007) Primer Edición, mayo, Gaceta Jurídica. 773PP.
- RABANAL PALACIOS, Hamilton - CASTRO TRIGOSO (2012): "EL CÓDIGO PROCESAL PENAL" – Jurista Editores - D' JUS - Edición Abril. 22. Herrera Velarde, Eduardo; "Gaceta Penal & Procesal, T.47. Rev. MAYO-2013, Pág., 201-217.
- MIRANDA E. Manuel (2006) "LA MISMA ACTIVIDAD PROBATORIA EN EL PROCESO PENAL" José BOSH. Editor. Barcelona

ANEXOS

Anexo N°01

TITULO: “NECESIDAD DE REGULACIÓN EN LA ACTUACIÓN INQUISITIVA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL EN LA FISCALÍA CORPORATIVA DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA 2016-2017”.

INSTRUCCIONES: Responda los ITEMS marcando con una X dentro del paréntesis ()

1. ¿Para usted, desde el punto de vista del derecho constitucional, existen instituciones relacionados a la prueba?
 - a) Sí ()
 - b) No ()
2. ¿Para usted el tema de necesidad de la prueba, en materia penal solamente le alcanza al Ministerio Público o también al justiciable?
 - a) Sí ()
 - b) No ()
3. ¿Para usted cuando existe la repercusión procesal, si al justiciable se le niega el derecho a la prueba se vulnera el derecho de defensa?
 - a) Sí ()
 - b) No ()
4. ¿Para usted a tu modo de ver la prueba penal obtenida de forma ilícita debe de ingresar como medio de prueba o no?
 - a) Sí ()
 - b) No ()
5. ¿Dentro del proceso penal nacional el testigo tiene derecho a la prueba, sí o no?
 - a) Sí ()
 - b) No ()

6. ¿El fiscal en la investigación preliminar puede abstenerse de buscar la prueba penal?
- a) Sí ()
- b) No ()
7. ¿Cree usted, que aquellos hechos que son perceptibles directamente por las facultades sensoriales, como la experiencia y las leyes de la naturaleza, no son susceptibles de ser objeto de prueba?
- a) Sí ()
- b) No ()
8. ¿Cree usted que el juzgador al resolver un caso concreto con el sistema de valoración de la prueba, se siente con mayor libertad de discrecionalidad, con el de libre valoración llamado también criterio de conciencia o con el sistema de la regla de la sana crítica?
- a) Sí ()
- b) No ()
9. ¿La valoración de la prueba penal limita la libertad de decisión del juzgador en cualquiera de los sistemas de valoración de prueba?
- a) Sí ()
- b) No ()
10. ¿A su parecer, en el proceso inmediato el justiciable se queda en estado de indefensión, al no poder presentar su carga de la prueba de descargo, por el breve tiempo?
- a) Sí ()
- b) No ()

Anexo N°02

Escala de valoración de los resultados del análisis de expedientes

(resoluciones de requerimiento de prisión preventiva)

1 = Si

2 = No

Nº	ÍTEMS	1	%	2	%
1	El Ministerio Público de Lauricocha al momento de solicitar su requerimiento de acusación tomó en consideración los presupuestos establecidos en el artículo 344° CPP				
2	El Ministerio Público de Lauricocha efectuó con el objetivo de la investigación que se propuso y se respetó los plazos.				
3	En la carpeta fiscal existen elementos de convicción suficientes para que el Ministerio Público de Lauricocha solicite el requerimiento de acusación.				
4	En su requerimiento de acusación del Ministerio Público contiene una especie de promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado, así como la responsabilidad penal del imputado serán acreditados en el juicio oral público y contradictorio, luego que se actúe la prueba por las partes				
5	Su requerimiento de acusación del Ministerio Público está siendo interpretado y aplicado correctamente por el Juzgado de Investigación Preparatoria				

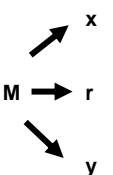
6	El Ministerio Público requiere su acusación teniendo en cuenta indicios razonables que los llevase a sospechar la existencia de un delito				
7	El Ministerio Público al requerir su acusación tuvo en consideración la finalidad de la investigación.				
8	El Ministerio Público al requerir su acusación ha vulnerado la presunción de inocencia del procesado.				

Tabla 1 - Escala de Valoración de resultados

Anexo N° 03

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: ACTUACIÓN INQUISITIVA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE LAURICOCHA 2016 - 2017

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPÓTESIS	VARIABLES	METODOLOGIA	INSTRUMENTO
<p>PROBLEMA PRINCIPAL</p> <p>PG. ¿En qué medida la independencia personal del juez influye como acto funcional en mejorar la seguridad jurídica en la administración de justicia peruano?</p> <p>PROBLEMAS ESPECÍFICOS</p> <p>PE.1: ¿De qué manera la presión del poder y el cálculo utilitarista político influye la independencia del Juez?</p> <p>PE.2: ¿En qué medida la independencia del</p>	<p>OBJETIVOS GENERALES.</p> <p>OG.1: Establecer en qué medida la independencia personal del Juez influye como acto funcional en mejorar la seguridad jurídica en la administración de justicia peruano.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS.</p> <p>OE.1: Determinar de qué manera la presión del poder y el cálculo utilitarista político influye la independencia del Juez.</p> <p>O.E.2: Establecer en qué medida la independencia del Juez se encuentra</p>	<p>HIPÓTESIS GENERAL</p> <p>HG.1: Continúa negativamente la actuación inquisitiva del representante del Ministerio Público vulnerando el derecho del imputado en el Nuevo Código Procesal al ofrecer la carga de la prueba por no ser favorable en la investigación en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lauricocha.</p> <p>HIPÓTESIS ESPECÍFICOS</p> <p>HE.1: El representante del Ministerio Público no actúa las pruebas de descargo con objetividad en el proceso penal por ende las investigaciones son arbitrarias e irregulares.</p> <p>HE.2: El representante del Ministerio Público si actúa bajo los parámetros del principio de legalidad entonces las pruebas</p>	<p>VARIBLES INDEPENDIENTES</p> <p>Independencia personal del Juez</p> <p>Indicadores</p> <ul style="list-style-type: none"> •Honestidad. •Alta responsabilidad funcional y social, •Especialización y Expertos. •Idoneidad. •Indemnización solidaria en partes iguales <p>VARIABLE DEPENDIENTE</p> <p>Sistema de justicia peruano</p> <p>Indicadores</p>	<p>MÉTODO:</p> <p>Observación Crítico Histórico Dialectico. Hermenéutica</p> <p>EL TIPO DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Es Aplicada</p> <p>NIVEL DE INVESTIGACIÓN</p> <p>Es descriptivo y explicativo</p> <p>DISEÑO:</p> <p>Es no experimental</p> <p>V. ESQUEMA</p>  <p>M = muestra x,y,= variables</p>	<p>Técnicas</p> <p>Encuesta Entrevista Observación</p> <p>Instrumento</p> <p>Cuestionario</p>

<p>Juez se encuentra proclamada en la constitución y otras leyes?</p> <p>PE3: ¿En qué medida la competencia dada por ley al juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento?</p> <p><i>Tabla 2 - Matriz de Consistencia</i></p>	<p>proclamada en la constitución y otras leyes.</p> <p>OE.3: Conocer en qué medida la competencia dada por ley al Juzgador le da autoridad exclusiva sobre la decisión del asunto puesto en su conocimiento.</p>	<p>de cargo y descargo en el proceso penal es eficaz.</p> <p>HE.3: El representante del Ministerio Público si no actúa inquisitivamente en la investigación en el proceso penal entonces se da igualdad de condiciones con las pruebas de cargo y descargo en el proceso penal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Regulación y modificación de normas •Modificación de la legislación. . •Doctrina de la responsabilidad funcional •Para promover la paz social en justicia. •El fomento a la inversión privada. •La estabilidad democrática. •Fomento al desarrollo 	<p>r = relación entre las variables</p> <p>POBLACIÓN Y MUESTRA</p> <p>Población Estará conformada por todos los Magistrados del Poder Judicial a nivel nacional.</p> <p>Muestra Estará determinada por el muestreo NO PROBABILÍSTICO de manera empírica o azar por el total de los Magistrados del Distrito Judicial de Huánuco.</p>	
--	---	---	---	--	--